



Ley de Acceso a la Información Pública

Augusto Jordán Rodas Andrade
Procurador de los Derechos Humanos

Directorio

Augusto Jordán Rodas Andrade

Procurador de los Derechos Humanos

Miriam Catarina Roquel Chávez

Procuradora Adjunta I

Claudia Caterina Maselli Loaiza

Procuradora Adjunta II

Claudia Lavinia Figueroa Perdomo

Secretaria General

Procurador de los Derechos Humanos

12 avenida 12-54, zona 1, Guatemala, Centroamérica

PBX: (502) 2424-1717

www.pdh.org.gt



DECRETO NÚMERO 57-2008

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA

CONSIDERANDO:

Que la Constitución Política de la República de Guatemala, dentro de sus fines considera la vida, la libertad y la seguridad de las personas como fines del Estado, teniendo a la persona como sujeto y fin del orden social, organizándose para que ésta logre su pleno desarrollo y se consiga el bienestar de todos los ciudadanos.

CONSIDERANDO:

Que los funcionarios y empleados públicos son simples depositarios del poder que emana del pueblo; que el texto constitucional determina que la soberanía radica en el pueblo el que la delega para su ejercicio en los organismos del Estado y que ningún funcionario, empleado público ni persona alguna es superior a la ley.

CONSIDERANDO:

Que la Carta Magna establece con absoluta determinación la publicidad de los actos y la información en poder de la administración pública, así como el libre acceso a todas las instituciones, dependencias y archivos de la misma, sin más excepciones que las previstas en el citado texto constitucional.



CONSIDERANDO:

Que para armonizar el derecho de las personas a acceder a la información en poder de la administración pública y a todos los actos, entes e instituciones que manejan recursos del Estado bajo cualquier concepto, se hace necesario emitir las normas que desarrollen esos principios constitucionales a efecto de contar con un marco jurídico regulatorio que garantice el ejercicio de esos derechos y que establezca las excepciones de la información confidencial y reservada, para que ésta no quede al arbitrio y discrecionalidad de persona alguna.

CONSIDERANDO:

Que en armonía y consonancia con lo anteriormente considerado, con base en el texto constitucional de Guatemala y los instrumentos internacionales sobre derechos humanos suscritos y vigentes en el país, se hace necesario emitir una ley que desarrollando esos derechos defina los principios, objetivos, procedimientos y en general aquellos aspectos necesarios para darle seguridad y certeza a todas las personas, consiguiendo hacer efectivo su derecho al acceso a la información pública y a su participación dentro de la auditoría social y fiscalización ciudadana hacia todos los funcionarios, empleados públicos, organismos, instituciones y en general hacia todo aquel que maneje, use, administre o disponga de recursos del Estado de Guatemala.



POR TANTO:

En uso de las atribuciones que le otorga el artículo 171 literal a) de la Constitución Política de la República de Guatemala,

DECRETA:

La siguiente:

LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

TÍTULO PRIMERO CAPÍTULO PRIMERO DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto de la Ley. La presente ley tiene por objeto:

1. Garantizar a toda persona interesada, sin discriminación alguna, el derecho a solicitar y a tener acceso a la información pública en posesión de las autoridades y sujetos obligados por la presente ley;
2. Garantizar a toda persona individual el derecho a conocer y proteger los datos personales de lo que de ella conste en archivos estatales, así como de las actualizaciones de los mismos;
3. Garantizar la transparencia de la administración pública y de los sujetos obligados y el derecho de toda persona a tener acceso libre a la información pública;
4. Establecer como obligatorio el principio de máxima publicidad y transparencia en la administración pública y para los sujetos obligados en la presente ley;



5. Establecer, a manera de excepción y de manera limitativa, los supuestos en que se restrinja el acceso a la información pública;
6. Favorecer por el Estado la rendición de cuentas a los gobernados, de manera que puedan auditar el desempeño de la administración pública;
7. Garantizar que toda persona tenga acceso a los actos de la administración pública.

Artículo 2. Naturaleza. La presente ley es de orden público, de interés nacional y utilidad social; establece las normas y los procedimientos para garantizar a toda persona, natural o jurídica, el acceso a la información o actos de la administración pública que se encuentre en los archivos, fichas, registros, base, banco o cualquier otra forma de almacenamiento de datos que se encuentren en los organismos del Estado, municipalidades, instituciones autónomas y descentralizadas y las entidades privadas que perciban, inviertan o administren fondos públicos, incluyendo fideicomisos constituidos con fondos públicos, obras o servicios públicos sujetos a concesión o administración.

Artículo 3. Principios. Esta ley se basa en los principios de:

- 1) Máxima publicidad;
- 2) Transparencia en el manejo y ejecución de los recursos públicos y actos de la administración pública;
- 3) Gratuidad en el acceso a la información pública;
- 4) Sencillez y celeridad de procedimiento.

Artículo 4. Ámbito de aplicación. Toda la información relacionada al derecho de acceso libre a la información contenida en registros, archivos, fichas, bancos, o cualquier otra forma de almacenamiento de información pública, en cus-



todia, depósito o administración de los sujetos obligados, se regirá por lo que establece la Constitución Política de la República de Guatemala y la presente ley.

Artículo 5. Sujeto activo. Es toda persona individual o jurídica, pública o privada, que tiene derecho a solicitar, tener acceso y obtener la información pública que hubiere solicitado conforme lo establecido en esta ley.

Artículo 6. Sujetos obligados. Es toda persona individual o jurídica, pública o privada, nacional o internacional de cualquier naturaleza, institución o entidad del Estado, organismo, órgano, entidad, dependencia, institución y cualquier otro que maneje, administre o ejecute recursos públicos, bienes del Estado, o actos de la administración pública en general, que está obligado a proporcionar la información pública que se le solicite, dentro de los que se incluye el siguiente listado, que es enunciativo y no limitativo:

1. Organismo Ejecutivo, todas sus dependencias, entidades centralizadas, descentralizadas y autónomas;
2. Organismo Legislativo y todas las dependencias que lo integran;
3. Organismo Judicial y todas las dependencias que lo integran;
4. Todas las entidades centralizadas, descentralizadas y autónomas;
5. Corte de Constitucionalidad;
6. Tribunal Supremo Electoral;
7. Contraloría General de Cuentas;
8. Ministerio Público;
9. Procuraduría General de la Nación;



10. Procurador de los Derechos Humanos;
11. Instituto de la Defensa Pública Penal;
12. Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala;
13. Registro Nacional de las Personas;
14. Instituto de Fomento Municipal;
15. Instituto Guatemalteco de Seguridad Social;
16. Instituto de Previsión Militar;
17. Gobernaciones Departamentales;
18. Municipalidades;
19. Consejos de Desarrollo Urbano y Rural;
20. Banco de Guatemala;
21. Junta Monetaria;
22. Superintendencia de Bancos;
23. Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, federaciones y asociaciones deportivas nacionales y departamentales que la integran;
24. Comité Olímpico Guatemalteco;
25. Universidad de San Carlos de Guatemala;
26. Superintendencia de Administración Tributaria;
27. Superintendencia de Telecomunicaciones;
28. Empresas del Estado y las entidades privadas que ejerzan funciones públicas;
29. Organizaciones No Gubernamentales, fundaciones y asociaciones que reciban, administren o ejecuten fondos públicos;
30. Todas las entidades de cualquier naturaleza que tengan como fuente de ingresos, ya sea total o parcialmente, recursos, subsidios o aportes del Estado;



31. Las empresas privadas a quienes se les haya otorgado mediante permiso, licencia, concesión o cualquier otra forma contractual la explotación de un bien del Estado;
32. Organismos y entidades públicas o privadas internacionales que reciban, manejen o administren fondos o recursos públicos;
33. Los fideicomisarios y fideicomitentes de los fideicomisos que se constituyan o administren con fondos públicos o provenientes de préstamos, convenios o tratados internacionales suscritos por la República de Guatemala;
34. Las personas individuales o jurídicas de cualquier naturaleza que reciban, manejen o administren fondos o recursos públicos por cualquier concepto, incluyendo los denominados fondos privativos o similares;
35. Comités, patronatos, asociaciones autorizadas por la ley para la recaudación y manejo de fondos para fines públicos y de beneficio social, que perciban aportes o donaciones del Estado.

En los casos en que leyes específicas regulen o establezcan reservas o garantías de confidencialidad deberán observarse las mismas para la aplicación de la presente ley.

Artículo 7. Actualización de Información. Los sujetos obligados deberán actualizar su información en un plazo no mayor de treinta días, después de producirse un cambio.

Artículo 8. Interpretación. La interpretación de la presente ley se hará con estricto apego a lo previsto en la Constitución Política de la República de Guatemala, la Ley del Organismo Judicial, los tratados y convenios internacionales



ratificados por el Estado de Guatemala, prevaleciendo en todo momento el principio de máxima publicidad.

Las disposiciones de esta ley se interpretarán de manera de procurar la adecuada protección de los derechos en ella reconocidos y el funcionamiento eficaz de sus garantías y defensas.

Artículo 9. Definiciones. Para los efectos de la presente ley, se entiende por:

- 1. Datos personales:** Los relativos a cualquier información concerniente a personas naturales identificadas o identificables.
- 2. Datos sensibles o datos personales sensibles:** Aquellos datos personales que se refieren a las características físicas o morales de las personas o a hechos o circunstancias de su vida privada o actividad, tales como los hábitos personales, de origen racial, el origen étnico, las ideologías y opiniones políticas, las creencias o convicciones religiosas, los estados de salud físicos o psíquicos, preferencia o vida sexual, situación moral y familiar u otras cuestiones íntimas de similar naturaleza.
- 3. Derecho de acceso a la información pública:** El derecho que tiene toda persona para tener acceso a la información generada, administrada o en poder de los sujetos obligados descritos en la presente ley, en los términos y condiciones de la misma.
- 4. Habeas data:** Es la garantía que tiene toda persona de ejercer el derecho para conocer lo que de ella conste en archivos, fichas, registros o cualquier otra forma de registros públicos, y la finalidad a que se dedica esta información, así como a su protección, corrección, rectificación o actualización. Los datos impersonales no



identificables, como aquellos de carácter demográfico recolectados para mantener estadísticas, no se sujetan al régimen de hábeas data o protección de datos personales de la presente ley.

5. **Información confidencial:** Es toda información en poder de los sujetos obligados que por mandato constitucional, o disposición expresa de una ley tenga acceso restringido, o haya sido entregada por personas individuales o jurídicas bajo garantía de confidencialidad.
6. **Información pública:** Es la información en poder de los sujetos obligados contenida en los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas o bien, cualquier otro registro que documente el ejercicio de las facultades o la actividad de los sujetos obligados y sus servidores públicos, sin importar su fuente o fecha de elaboración. Los documentos podrán estar en cualquier medio sea escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico y que no sea confidencial ni estar clasificado como temporalmente reservado.
7. **Información reservada:** Es la información pública cuyo acceso se encuentra temporalmente restringido por disposición expresa de una ley, o haya sido clasificada como tal, siguiendo el procedimiento establecido en la presente ley.
8. **Máxima publicidad:** Es el principio de que toda información en posesión de cualquier sujeto obligado, es pública. No podrá ser reservada ni limitada sino por disposición constitucional o legal.
9. **Seguridad nacional:** Son todos aquellos asuntos que son parte de la política del Estado para preservar la



integridad física de la nación y de su territorio a fin de proteger todos los elementos que conforman el Estado de cualquier agresión producida por grupos extranjeros o nacionales beligerantes, y aquellos que se refieren a la sobrevivencia del Estado-Nación frente a otros Estados.

CAPÍTULO SEGUNDO

OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA

Artículo 10. Información pública de oficio. Los Sujetos Obligados deberán mantener, actualizada y disponible, en todo momento, de acuerdo con sus funciones y a disposición de cualquier interesado, como mínimo, la siguiente información, que podrá ser consultada de manera directa o a través de los portales electrónicos de cada sujeto obligado:

1. Estructura orgánica y funciones de cada una de las dependencias y departamentos, incluyendo su marco normativo;
2. Dirección y teléfonos de la entidad y de todas las dependencias que la conforman;
3. Directorio de empleados y servidores públicos, incluyendo números de teléfono y direcciones de correo electrónico oficiales no privados; quedan exentos de esta obligación los sujetos obligados cuando se ponga en riesgo el sistema nacional de seguridad, la investigación criminal e inteligencia del Estado;
4. Número y nombre de funcionarios, servidores públicos, empleados y asesores que laboran en el sujeto obligado y todas sus dependencias, incluyendo salarios que corresponden a cada cargo, honorarios, dietas, bonos, viáticos o cualquier otra remuneración económica que



perciban por cualquier concepto. Quedan exentos de esta obligación los sujetos obligados cuando se ponga en riesgo el sistema nacional de seguridad, la investigación criminal e inteligencia del Estado;

5. La misión y objetivos de la institución, su plan operativo anual y los resultados obtenidos en el cumplimiento de los mismos;
6. Manuales de procedimientos, tanto administrativos como operativos;
7. La información sobre el presupuesto de ingresos y egresos asignado para cada ejercicio fiscal; los programas cuya elaboración y/o ejecución se encuentren a su cargo y todas las modificaciones que se realicen al mismo, incluyendo transferencias internas y externas;
8. Los informes mensuales de ejecución presupuestaria de todos los renglones y de todas las unidades, tanto operativas como administrativas de la entidad;
9. La información detallada sobre los depósitos constituidos con fondos públicos provenientes de ingresos ordinarios, extraordinarios, impuestos, fondos privativos, empréstitos y donaciones;
10. La información relacionada con los procesos de cotización y licitación para la adquisición de bienes que son utilizados para los programas de educación, salud, seguridad, desarrollo rural y todos aquellos que tienen dentro de sus características la entrega de dichos bienes a beneficiarios directos o indirectos, indicando las cantidades, precios unitarios, los montos, los renglones presupuestarios correspondientes, las características de los proveedores, los detalles de los procesos de adjudicación y el contenido de los contratos;
11. La información sobre contrataciones de todos los bienes y servicios que son utilizados por los sujetos obligados,



- identificando los montos, precios unitarios, costos, los renglones presupuestarios correspondientes, las características de los proveedores, los detalles de los procesos de adjudicación y el contenido de los contratos;
12. Listado de viajes nacionales e internacionales autorizados por los sujetos obligados y que son financiados con fondos públicos, ya sea para funcionarios públicos o para cualquier otra persona, incluyendo objetivos de los viajes, personal autorizado a viajar, destino y costos, tanto de boletos aéreos como de viáticos;
 13. La información relacionada al inventario de bienes muebles e inmuebles con que cuenta cada uno de los sujetos obligados por la presente ley para el cumplimiento de sus atribuciones;
 14. Información sobre los contratos de mantenimiento de equipo, vehículos, inmuebles, plantas e instalaciones de todos los sujetos obligados, incluyendo monto y plazo del contrato e información del proveedor;
 15. Los montos asignados, los criterios de acceso y los parámetros de beneficiarios de los programas de subsidios, becas o transferencias otorgados con fondos públicos;
 16. La información relacionada a los contratos, licencias o concesiones para el usufructo o explotación de bienes del Estado;
 17. Los listados de las empresas precalificadas para la ejecución de obras públicas, de venta de bienes y de prestación de servicios de cualquier naturaleza, incluyendo la información relacionada a la razón social, capital autorizado y la información que corresponda al renglón para el que fueron precalificadas;
 18. El listado de las obras en ejecución o ejecutadas total o parcialmente con fondos públicos, o con recursos provenientes de préstamos otorgados a cualquiera de



las entidades del Estado, indicando la ubicación exacta, el costo total de la obra, la fuente de financiamiento, el tiempo de ejecución, beneficiarios, empresa o entidad ejecutora, nombre del funcionario responsable de la obra, contenido y especificaciones del contrato correspondiente;

19. Los contratos de arrendamiento de inmuebles, equipo, maquinaria o cualquier otro bien o servicio, especificando las características de los mismos, motivos del arrendamiento, datos generales del arrendatario, monto y plazo de los contratos;
20. Información sobre todas las contrataciones que se re-lisen a través de los procesos de cotización y licitación y sus contratos respectivos, identificando el número de operación correspondiente a los sistemas electrónicos de registro de contrataciones de bienes o servicios, fecha de adjudicación, nombre del proveedor, monto adjudicado, plazo del contrato y fecha de aprobación del contrato respectivo;
21. Destino total del ejercicio de los recursos de los fideicomisos constituidos con fondos públicos, incluyendo la información relacionada a las cotizaciones o licitaciones realizadas para la ejecución de dichos recursos y gastos administrativos y operativos del fideicomiso;
22. El listado de las compras directas realizadas por las dependencias de los sujetos obligados;
23. Los informes finales de las auditorías gubernamentales o privadas practicadas a los sujetos obligados, conforme a los períodos de revisión correspondientes;
24. En caso de las entidades públicas o privadas de carácter internacional, que manejen o administren fondos públicos deberán hacer pública la información obligatoria contenida en los numerales anteriores, relacionada



- únicamente a las compras y contrataciones que realicen con dichos fondos;
25. En caso de las entidades no gubernamentales o de carácter privado que manejen o administren fondos públicos deben hacer pública la información obligatoria contenida en los numerales anteriores, relacionada únicamente a las compras y contrataciones que realicen con dichos fondos;
 26. Los responsables de los archivos de cada uno de los sujetos obligados deberán publicar, por lo menos una vez al año, y a través del Diario de Centro América, un informe sobre: el funcionamiento y finalidad del archivo, sus sistemas de registro y categorías de información, los procedimientos y facilidades de acceso al archivo;
 27. El índice de la información debidamente clasificada de acuerdo a esta ley;
 28. Las entidades e instituciones del Estado deberán mantener informe actualizado sobre los datos relacionados con la pertenencia sociolingüística de los usuarios de sus servicios, a efecto de adecuar la prestación de los mismos;
 29. Cualquier otra información que sea de utilidad o relevancia para cumplir con los fines y objetivos de la presente ley.

Artículo 11. Información pública de oficio del Organismo Ejecutivo. El Organismo Ejecutivo, además de la información pública de oficio contenida en la presente ley, debe hacer pública como mínimo la siguiente:

1. El ejercicio de su presupuesto asignado por ministerio, viceministerio, direcciones generales e instituciones descentralizadas;



2. El listado de asesores, con sus respectivas remuneraciones de cada una de las instituciones mencionadas en el numeral anterior;
3. El informe de los gastos y viáticos de las delegaciones de cada institución al exterior del país, así como el destino, objetivos y logros alcanzados.

Artículo 12. Información pública de oficio del Organismo Judicial.

Judicial. El Organismo Judicial, además de la información pública de oficio contenida en la presente ley, debe hacer pública como mínimo la siguiente:

1. Las sentencias condenatorias dictadas con autoridad de cosa juzgada por delitos de derechos humanos y lesa humanidad;
2. Las sentencias condenatorias con autoridad de cosa juzgada, por delitos en caso de manejo de fondos públicos;
3. Las sentencias condenatorias con autoridad de cosa juzgada por delitos cometidos por funcionarios y empleados públicos;
4. El ejercicio de su presupuesto asignado a la Corte Suprema de Justicia, Salas de Apelaciones, Tribunales de Primera Instancia de Ejecución y Sentencia, y Juzgados de Paz de todo el país;
5. El listado de asesores con sus respectivas remuneraciones de cada uno de los tribunales mencionados en el numeral anterior;
6. El informe de los gastos y viáticos de las delegaciones de cada institución al exterior del país, así como el destino, objetivos y logros alcanzados.



Artículo 13. Información pública de oficio del Organismo Legislativo. El Congreso de la República de Guatemala, además de la información pública de oficio contenida en la presente ley, debe hacer pública como mínima la siguiente:

1. El ejercicio de su presupuesto asignado por bloque legislativo y comisión;
2. El listado de asesores y asistentes de Junta Directiva, bloques legislativos, bancadas, comisiones y diputados con sus respectivas remuneraciones;
3. El proyecto del orden del día de las sesiones ordinarias y extraordinarias en el pleno y comisiones, con veinticuatro horas de anticipación;
4. Las iniciativas de ley;
5. Los dictámenes emitidos por cada una de las comisiones sobre las iniciativas de ley;
6. Los decretos;
7. Los acuerdos;
8. Los puntos resolutivos;
9. Las resoluciones;
10. Actas de las sesiones de las comisiones de trabajo; y
11. Diario de las Sesiones Plenarias.

Artículo 14. Recursos públicos. Las organizaciones no gubernamentales, fundaciones, asociaciones y otras entidades de carácter privado que administren o ejecuten recursos públicos, o que realicen colectas públicas, además de la información pública de oficio contenida en la presente ley, debe hacer pública la siguiente:



1. Datos generales de la organización;
2. Acuerdo o resolución de la autoridad que las autoriza;
3. Integrantes de la junta directiva;
4. Estatutos;
5. Objetivos; y
6. Misión y visión;

Artículo 15. Uso y difusión de la información. Los interesados tendrán responsabilidad, penal y civil por el uso, manejo o difusión de la información pública a la que tengan acceso, de conformidad con esta ley y demás leyes aplicables.

CAPÍTULO TERCERO

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Artículo 16. Procedimiento de acceso a la información. Toda persona tiene derecho a tener acceso a la información pública en posesión de los sujetos obligados, cuando lo solicite de conformidad con lo previsto en esta ley.

Artículo 17. Consulta personal. Los sujetos deben tomar todas las medidas de seguridad, cuidado y conservación de los documentos, elementos o expedientes de cualquier naturaleza, propiedad del sujeto obligado que le fueren mostrados o puestos a disposición en consulta personal; así como hacer del conocimiento de la autoridad competente toda destrucción, menoscabo o uso indebido de los mismos, por cualquier persona.

Artículo 18. Gratuidad. El acceso a la información pública será gratuito, para efectos de análisis y consulta en las oficinas del sujeto obligado. Si el interesado solicita la obtención de copias, reproducciones escritas o por medios electrónicos, se hará de conformidad con lo establecido en la presente ley.



La consulta de la información pública se regirá por el principio de sencillez y gratuidad. Sólo se cobrarán los gastos de reproducción de la información. La reproducción de la información habilitará al Estado a realizar el cobro por un monto que en ningún caso será superior a los costos del mercado y que no podrán exceder de los costos necesarios para la reproducción de la información.

Los sujetos obligados deberán esforzarse por reducir al máximo, los costos de la entrega de información, permitiendo la consulta directa de la misma o que el particular entregue los materiales para su reproducción; cuando no se aporten dichos materiales se cobrara el valor de los mismos.

Lo relativo a certificaciones y copias secretariales, se regulará conforme a la Ley del Organismo Judicial.

CAPÍTULO CUARTO

UNIDADES DE INFORMACIÓN PÚBLICA

Artículo 19. Unidades de Información Pública. El titular de cada sujeto obligado debe designar al servidor público, empleado u órgano interno que fungirá como Unidad de Información, debiendo tener un enlace en todas las oficinas o dependencias que el sujeto obligado tenga ubicadas a nivel nacional.

Artículo 20. Obligaciones de las Unidades de Información Pública. Las Unidades de Información tendrán a su cargo:

1. Recibir y tramitar las solicitudes de acceso a la información pública;
2. Orientar a los interesados en la formulación de solicitudes de información pública;



3. Proporcionar para su consulta la información pública solicitada por los interesados o notificar la negativa de acceso a la misma, razonando dicha negativa;
4. Expedir copia simple o certificada de la información pública solicitada, siempre que se encuentre en los archivos del sujeto obligado;
5. Coordinar, organizar, administrar, custodiar y sistematizar los archivos que contengan la información pública a su cargo, respetando en todo momento la legislación en la materia; y
6. Las demás obligaciones que señale esta ley.

CAPÍTULO QUINTO INFORMACIÓN CONFIDENCIAL Y RESERVADA

Artículo 21. Límites del derecho de acceso a la información. El acceso a la información pública será limitado de acuerdo a lo establecido en la Constitución Política de la República de Guatemala, la que por disposición expresa de una ley sea considerada confidencial, la información clasificada como reservada de conformidad con la presente ley y las que de acuerdo a tratados o convenios internacionales ratificados por el Estado de Guatemala tengan cláusula de reserva.

Artículo 22. Información confidencial. Para los efectos de esta ley se considera información confidencial la siguiente:

1. La expresamente definida en el artículo veinticuatro de la Constitución Política de la República de Guatemala;
2. La expresamente definida como confidencial en la Ley de Bancos y Grupos Financieros;



3. La información calificada como secreto profesional;
4. La que por disposición expresa de una ley sea considerada como confidencial;
5. Los datos sensibles o personales sensibles, que solo podrán ser conocidos por el titular del derecho;
6. La información de particulares recibida por el sujeto obligado bajo garantía de confidencial.

El fundamento de la clasificación de confidencial se hará del conocimiento del particular al resolver, en sentido negativo o acceso parcial, alguna solicitud de información, permitiendo el acceso a las partes de la información que no fueren consideradas como confidencial.

Artículo 23. Información reservada. Para los efectos de esta ley se considera información reservada la siguiente:

1. La información relacionada con asuntos militares clasificados como de seguridad nacional;
2. La información relacionada a asuntos diplomáticos, clasificados como de seguridad nacional;
3. La información relacionada con la propiedad intelectual, propiedad industrial, patentes o marcas en poder de las autoridades; se estará a lo dispuesto por los convenios o tratados internacionales ratificados por la República de Guatemala y demás leyes de la materia;
4. Cuando la información que se difunda pueda causar un serio perjuicio o daño a las actividades de investigación, prevención o persecución de los delitos, la relacionada a los procesos de inteligencia del Estado o a la impartición de justicia;



5. los expedientes judiciales en tanto no hayan causado ejecutoria, de conformidad con las leyes especiales;
6. la información cuya difusión antes de adoptarse la medida, decisión o resolución de que se trate pueda dañar la estabilidad económica, financiera o monetaria del país, así como aquella que guarde relación con aspectos de vigilancia e inspección por parte de la Superintendencia de Bancos;
7. La información definida como reservada en la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia;
8. Los análisis proporcionados al Presidente de la República orientados a proveer la defensa y la seguridad de la nación así como la conservación del orden público. El derecho a acceder a la información pública en que se hubiese basado el análisis podrá ejercerse ante los órganos o entidades que la tengan en su poder;
9. La que sea determinada como reservada por efecto de otra ley.

Artículo 24. Información en derechos humanos. En ningún caso podrá clasificarse como confidencial o reservada la información relativa a investigaciones de violaciones a los derechos humanos fundamentales o a delitos de lesa humanidad.

Artículo 25. Clasificación de la información. La clasificación de información reservada se hará mediante resolución de la máxima autoridad del sujeto obligado la que debe ser publicada en el Diario Oficial y debe indicar lo siguiente:

1. La fuente de la información;
2. El fundamento por el cual se clasifica;
3. Las partes de los documentos que se reservan;



4. El plazo de reserva que no será mayor de siete años; y,
5. El nombre de la autoridad responsable de su conservación.

Son nulas aquellas resoluciones que clasifiquen la información como confidencial o reservada si estas no llenan los requisitos establecidos en la presente ley. Será procedente el recurso de revisión.

Artículo 26. Prueba de daño. En caso que la autoridad fundamentalmente la clasificación de reservada o confidencial, la información deberá demostrar cabalmente el cumplimiento de los siguientes tres requisitos:

1. Que la información encuadre legítimamente en alguno de los casos de excepción previstas en esta ley;
2. Que la liberación de la información de referencia pueda amenazar efectivamente el interés protegido por la ley; y,
3. Que el perjuicio o daño que pueda producirse con la liberación de la información es mayor que el interés público de conocer la información de referencia.

Artículo 27. Período de reserva. La información pública clasificada como reservada, de acuerdo con esta ley, dejará de tener dicho carácter cuando ocurriere alguna de estas situaciones:

1. Que hubieren transcurrido el plazo de su reserva, que no será mayor de siete años contados a partir de la fecha de su clasificación;
2. Dejaren de existir las razones que fundamentaron su clasificación como información pública reservada; o
3. Por resolución del órgano jurisdiccional o autoridad judicial competente.



Artículo 28. Ampliación del período de reserva. Cuando persistan las causas que hubieren dado origen a la clasificación de información reservada, de conformidad con esta ley, los sujetos obligados podrán hacer la declaración de la ampliación del plazo de reserva hasta por cinco años más sin que pueda exceder de doce años el tiempo total de clasificación.

En estos casos será procedente el recurso de revisión.

Artículo 29. Orden judicial. La información clasificada como reservada o confidencial debe ser puesta a disposición de las autoridades encargadas de la procuración y administración de justicia cuando así lo solicitaren, mediante orden judicial, siempre que ésta sea indispensable y necesaria en un proceso judicial.

CAPÍTULO SEXTO HÁBEAS DATA

Artículo 30. Hábeas data. Los sujetos obligados serán responsables de los datos personales y, en relación con éstos, deberán:

1. Adoptar los procedimientos adecuados para recibir y responder las solicitudes de acceso y corrección de datos que sean presentados por los titulares de los mismos o sus representantes legales, así como capacitar a los servidores públicos y dar a conocer información sobre sus políticas en relación con la protección de tales datos;
2. Administrar datos personales sólo cuando éstos sean adecuados, pertinentes y no excesivos, en relación con los propósitos para los cuales se hayan obtenido;



3. Poner a disposición de la persona individual, a partir del momento en el cual se recaben datos personales, el documento en el que se establezcan los propósitos para su tratamiento;
4. Procurar que los datos personales sean exactos y actualizados;
5. Adoptar las medidas necesarias que garanticen la seguridad, y en su caso confidencia o reserva de los datos personales y eviten su alteración, pérdida, transmisión y acceso no autorizado.

Los sujetos activos no podrán usar la información obtenida para fines comerciales, salvo autorización expresa del titular de la información.

Artículo 31. Consentimiento expreso. Los sujetos obligados no podrán difundir, distribuir o comercializar los datos personales contenidos en los sistemas de información desarrollados en el ejercicio de sus funciones, salvo que hubiere mediado el consentimiento expreso por escrito de los individuos a que hiciere referencia la información. El Estado vigilará que en caso de que se otorgue el consentimiento expreso, no se incurra en ningún momento en vicio de la voluntad en perjuicio del gobernado, explicándole claramente las consecuencias de sus actos.

Queda expresamente prohibida la comercialización por cualquier medio de datos sensibles o datos personales sensibles.

Artículo 32. Excepción del consentimiento. No se requerirá el consentimiento del titular de la información para proporcionar los datos personales en los siguientes casos:



1. Los necesarios por razones estadísticas, científicas o de interés general previstas en ley, previo procedimiento por el cual no puedan asociarse los datos personales con el individuo a quien se refieran;
2. Cuando se transmitan entre sujetos obligados o entre dependencias y entidades del Estado, siempre y cuando los datos se utilicen para el ejercicio de facultades propias de los mismos;
3. Cuando exista una orden judicial;
4. Los establecidos en esta ley;
5. Los contenidos en los registros públicos;
6. En los demás casos que establezcan las leyes.

En ningún caso se podrán crear bancos de datos o archivos con datos sensibles o datos personales sensibles, salvo que sean utilizados para el servicio y atención propia de la institución.

Artículo 33. Acceso a los datos personales. Sin perjuicio de lo que dispongan otras leyes, sólo los titulares de la información o sus representantes legales podrán solicitarla, previa acreditación, que se les proporcione los datos personales que estén contenidos en sus archivos o sistema de información. Ésta Información debe ser entregada por el sujeto obligado, dentro de los diez días hábiles siguientes contados a partir de la presentación de la solicitud, en formato comprensible para el solicitante, o bien de la misma forma debe comunicarle por escrito que el sistema de datos personales no contiene los referidos al solicitante.

Artículo 34. Tratamiento de los datos personales. Los titulares o sus representantes legales podrán solicitar, previa acreditación, que modifiquen sus datos personales contenidos en cualquier sistema de información. Con tal propó-



sito, el interesado debe entregar una solicitud de modificaciones, en la que señale el sistema de datos personales, indique las modificaciones que desea realizar y aporte la documentación que motive su petición. El sujeto obligado debe entregar al solicitante, en un plazo no mayor de treinta días hábiles desde la presentación de la solicitud, una resolución que haga constar las modificaciones o bien, le informe de manera fundamentada, las razones por las cuales no procedieron las mismas.

Artículo 35. Denegación expresa. Contra la negativa de entregar o corregir datos personales, procederá la interposición del recurso de revisión previsto en esta ley.

CAPÍTULO SÉPTIMO ARCHIVOS PÚBLICOS

Artículo 36. Salvaguarda de documentos. La información pública localizada y localizable en los archivos administrativos no podrá destruirse, alterarse, modificarse, mutilarse u ocultarse por determinación de los servidores públicos que la produzcan, procesen, administren, archiven y resguarden, salvo que los actos en ese sentido formaren parte del ejercicio de la función pública y estuvieren jurídicamente justificados.

El incumplimiento de esta norma será sancionado de conformidad con esta ley y demás leyes aplicables.

Artículo 37. Archivos administrativos. Con relación a la información, documentos y expedientes que formen parte de los archivos administrativos no podrán en ningún caso ser destruidos, alterados o modificados sin justificación. Los servidores públicos que incumplan el presente y el



anterior artículo de esta ley podrán ser destituidos de su cargo y sujetos a lo previsto por los artículos 418 Abuso de Autoridad y 419 Incumplimiento de Deberes del Código Penal vigente. Si se trata de particulares quienes coadyuvan, provoquen o inciten, directa o indirectamente a la destrucción, alteración o modificación de archivos históricos, aplicará el delito de depredación del patrimonio nacional, regulado en el Código Penal.

TÍTULO SEGUNDO

PROCEDIMIENTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

CAPÍTULO ÚNICO

Artículo 38. Procedimiento de acceso a la información pública. El procedimiento para el acceso a la información pública se inicia mediante solicitud verbal, escrita o vía electrónica que deberá formular el interesado al sujeto obligado, a través de la Unidad de Información. El modelo de solicitud de información tendrá el propósito de facilitar el acceso a la información pública, pero no constituirá un requisito de procedencia para ejercer el derecho de acceso a la información pública.

La persona de la Unidad de Información que reciba la solicitud no podrá alegar incompetencia o falta de autorización para recibirla, debiendo obligadamente, bajo su responsabilidad, remitirla inmediatamente a quien corresponda.

El procedimiento de acceso a la información no perjudicará, limitará o sustituirá el derecho a presenciar u observar los actos de los sujetos obligados, ni limitará el derecho a solicitar información a los sujetos obligados en la forma



contemplada en otras leyes, ni la realización de solicitudes de información que pudieran hacerse ante entes cuya naturaleza es de publicidad frente a terceros en donde por principio de especialidad se deberá acudir a través de los trámites correspondientes.

Artículo 39. Sistemas de información electrónicos. Los sujetos obligados establecerán como vía de acceso a la información pública, entre otros, sistemas de información electrónicos.

Bajo responsabilidad de la autoridad máxima garantizará que la información publicada sea fidedigna y legítima.

La información publicada en los sistemas de información electrónicos, entre otros, deberá coincidir exactamente con los sistemas de administración financiera, contable y de auditoría y esta deberá ser actualizada en los plazos establecidos en esta ley.

Artículo 40. Respuesta en sistemas de información electrónicos. Los sujetos obligados adoptarán las medidas de seguridad que permitan dotar de certeza a los informes enviados por mensajes de datos. En cualquier caso conservarán constancia de las resoluciones originales.

Artículo 41. Solicitud de información. Todo acceso a la información pública se realizará a petición del interesado, en la que se consignarán los siguientes datos:

1. Identificación del sujeto obligado a quien se dirija;
2. Identificación del solicitante; y,
3. Identificación clara y precisa de la información que se solicita.



La solicitud de información no estará sujeta a ninguna otra formalidad, ni podrá exigirse la manifestación de una razón o interés específico como requisito de la misma.

Artículo 42. Tiempo de respuesta. Presentada y admitida la solicitud, la Unidad de Información donde se presentó, debe emitir resolución dentro de los diez días siguientes en alguno de los sentidos que a continuación se expresan:

1. Entregando la información solicitada;
2. Notificando la negativa de la información cuando el interesado, dentro del plazo concedido, no haya hecho las aclaraciones solicitadas o subsanado las omisiones a que se refiere el artículo anterior;
3. Notificando la negativa de la información total o parcialmente, cuando se trataré de la considerada como reservada o confidencial; o,
4. Expresando la inexistencia.

Artículo 43. Prórroga del tiempo de respuesta. Cuando el volumen y extensión de la respuesta así lo justifique, el plazo de respuesta a que se refiere la presente ley se podrá ampliar hasta por diez días más, debiendo poner en conocimiento del interesado dentro de los dos días anteriores a la conclusión del plazo señalado en esta ley.

Artículo 44. Afirmativa ficta. Cuando el sujeto obligado no diere respuesta alguna en el plazo y forma que está obligado, éste quedará obligado a otorgarla al interesado en un período no mayor de diez días posteriores al vencimiento del plazo para la respuesta, sin costo alguno y sin que medie solicitud de parte interesada.



El incumplimiento de lo previsto en este artículo será causal de responsabilidad penal.

Artículo 45. Certeza de entrega de información. A toda solicitud de información pública deberá recaer una resolución por escrito. En caso de ampliación del término de respuesta establecido en la presente ley, o de negativa de la información, ésta deberá encontrarse debidamente fundada y motivada.

Quienes soliciten información pública tendrán derecho a que ésta les sea proporcionada por escrito o a recibirla a su elección por cualquier otro medio de reproducción.

La información se proporcionará en el estado en que se encuentre en posesión de los sujetos obligados. La obligación no comprenderá el procesamiento de la misma, ni el presentarla conforme al interés del solicitante.

TÍTULO TERCERO INTERVENCIÓN DEL PROCURADOR DE LOS DERECHOS HUMANOS

CAPÍTULO PRIMERO ATRIBUCIONES

Artículo 46. Autoridad reguladora. El acceso a la información pública como derecho humano fundamental previsto en la Constitución Política de la República de Guatemala y los tratados o convenios internacionales en esta materia ratificados por el Estado de Guatemala, estará protegido por el Procurador de los Derechos Humanos en los términos de la



Ley de la Comisión de los Derechos Humanos del Congreso de la República y del Procurador de los Derechos Humanos, Decreto Número 54-86 del Congreso de la República.

Artículo 47. Facultades de la autoridad reguladora. El Procurador de los Derechos Humanos tiene las atribuciones en materia de derecho de acceso a la información pública previstas en los artículos 13, 14 y demás artículos aplicables de la Ley de la Comisión de los Derechos Humanos del Congreso de la República y del Procurador de los Derechos Humanos, Decreto Número 54-86 del Congreso de la República.

Artículo 48. Informe de los sujetos obligados. Los sujetos obligados deberán presentar al Procurador de los Derechos Humanos, un informe por escrito correspondiente al año anterior, a más tardar antes de que finalice el último día hábil del mes de enero siguiente. El informe deberá contener:

1. El número de solicitudes formuladas al sujeto obligado de que se trate y el tipo de información requerida;
2. El resultado de cada una de las solicitudes de información;
3. Sus tiempos de respuesta;
4. La cantidad de solicitudes pendientes;
5. La cantidad de solicitudes con ampliación de plazos;
6. El número de solicitudes desechadas;
7. La cantidad de solicitudes no satisfechas por ser información reservada o confidencial; y,
8. El número de impugnaciones.



El Procurador de los Derechos Humanos podrá solicitar, en los casos de los numerales 4, 5, 6 y 7, los motivos y el fundamento que originaron esa resolución. Lo anterior con fundamento en lo previsto por el artículo 14, literal i) de la Ley de la Comisión de los Derechos Humanos del Congreso de la República y del Procurador de los Derechos Humanos, Decreto Número 54-86 del Congreso de la República.

Artículo 49. Informe anual de la autoridad reguladora. El Procurador de los Derechos Humanos dentro de su informe anual ante el pleno del Congreso de la República de Guatemala, podrá informar sobre:

1. El número de solicitudes de acceso a la información presentadas ante cada sujeto obligado y su resultado;
2. El tiempo de respuesta;
3. El estado que guardan las impugnaciones presentadas y las dificultades observadas en el cumplimiento de esta ley;
4. Un diagnóstico y recomendaciones; y,
5. Su programa de capacitación, implementación y resultado para los sujetos obligados.

CAPÍTULO SEGUNDO CULTURA DE LA TRANSPARENCIA

Artículo 50. Cultura de la transparencia. Las autoridades educativas competentes incluirán el tema del derecho de acceso a la información pública en la currícula de estudios de los niveles primario, medio y superior.

Artículo 51. Capacitación. Los sujetos obligados deberán establecer programas de actualización permanente a sus servidores públicos en materia del derecho de acceso a la



información pública y sobre el derecho a la protección de los datos personales de los particulares, mediante cursos, talleres, seminarios y toda estrategia pedagógica que se considere pertinente.

Igual obligación corresponde a los sujetos obligados que no formen parte de la administración pública ni de la organización del Estado.

TÍTULO CUARTO RECURSO DE REVISIÓN

CAPÍTULO PRIMERO DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 52. Recurso de revisión. El recurso de revisión regulado en esta ley es un medio de defensa jurídica que tiene por objeto garantizar que en los actos y resoluciones de los sujetos obligados se respeten las garantías de legalidad y seguridad jurídica.

Artículo 53. Autoridad competente. La máxima autoridad de cada sujeto obligado será la competente para resolver los recursos de revisión interpuestos contra actos o resoluciones de los sujetos obligados referidas en esta ley, en materia de acceso a la información pública y hábeas data.

CAPÍTULO SEGUNDO PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN

Artículo 54. Recurso de revisión en materia de acceso a la información. El solicitante a quién se le hubiere negado la información o invocado la inexistencia de documentos



solicitados, podrá interponer, por sí mismo o a través de su representante legal, el recurso de revisión ante la máxima autoridad dentro de los quince días siguientes a la fecha de la notificación.

Artículo 55. Procedencia del recurso de revisión. El recurso de revisión también procederá en los mismos términos y plazos cuando:

1. El sujeto obligado no entregue al solicitante los datos personales solicitados, o lo haga en un formato incomprendible;
2. El sujeto obligado se niegue a efectuar modificaciones, correcciones o supresiones a los datos personales;
3. El solicitante considere que la información entregada es incompleta o no corresponda a la información requerida en la solicitud;
4. En caso de falta de respuesta en los términos de la presente ley;
5. Por vencimiento del plazo establecido para la entrega de la información solicitada;
6. En los casos específicamente estipulados en esta ley.

Artículo 56. Sencillez del procedimiento. La máxima autoridad subsanará inmediatamente las deficiencias de los recursos interpuestos.

Artículo 57. Requisitos del recurso de revisión. La solicitud por la que se interpone el recurso de revisión deberá contener:



1. La dependencia o entidad ante la cual se presentó la solicitud;
2. El nombre del recurrente y del tercero interesado si lo hay, así como el domicilio, lugar o medio que señale para recibir notificaciones;
3. La fecha en que se le notificó o tuvo conocimiento del acto reclamado;
4. El acto que se recurre y los puntos petitorios;
5. Los demás elementos que considere procedentes someter a juicio de la máxima autoridad.

Artículo 58. Procedimiento del recurso de revisión. La máxima autoridad sustanciará el recurso de revisión conforme a los lineamientos siguientes:

1. Interpuesto el recurso de revisión, la máxima autoridad resolverá en definitiva dentro de los cinco días siguientes;
2. Las resoluciones de la máxima autoridad serán públicas.

Artículo 59. Sentido de la resolución de la máxima autoridad. Las resoluciones de la máxima autoridad podrán:

1. Confirmar la decisión de la Unidad de Información;
2. Revocar o modificar las decisiones de la Unidad de Información y ordenar a la dependencia o entidad que permita al particular el acceso a la información solicitada, la entrega de la misma o las modificaciones, correcciones o supresiones a los datos personales sensibles solicitados.



Las resoluciones, deben constar por escrito y establecer el plazo para su cumplimiento y los procedimientos para asegurar la ejecución.

Artículo 60. Resolución del recurso de revisión. Emitida la resolución de la máxima autoridad, declarando la procedencia o improcedencia de las pretensiones del recurrente, cominará en su caso al obligado para que dé exacto cumplimiento a lo resuelto dentro del plazo de cinco días, bajo apercibimiento, en caso de incumplimiento, de certificar lo conducente ante el órgano jurisdiccional competente, y sin perjuicio de dictarse todas aquellas medidas de carácter administrativo y las que conduzcan a la inmediata ejecución de lo resuelto.

Agotado el procedimiento de revisión se tendrá por concluida la fase administrativa pudiendo el interesado interponer la acción de amparo respectiva a efecto hacer prevalecer su derecho constitucional, sin perjuicio de las acciones legales de otra índole.

TÍTULO QUINTO

CAPÍTULO ÚNICO

RESPONSABILIDADES Y SANCIONES

Artículo 61. Sistema de sanciones. Todo funcionario público, servidor público o cualquier persona que infrinja las disposiciones de la presente ley, estarán sujetos a la aplicación de sanciones administrativas o penales de conformidad con las disposiciones previstas en la presente ley y demás leyes aplicables.



Artículo 62. Aplicación de sanciones. Las faltas administrativas cometidas por los responsables en el cumplimiento de la presente ley serán sancionadas de acuerdo a la gravedad de las mismas, sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales que correspondan.

Artículo 63. Procedimiento sancionatorio administrativo. En la sustanciación y decisión del procedimiento sancionatorio administrativo, se aplicarán las normas en la materia.

Artículo 64. Comercialización de datos personales. Quien comercialice o distribuya por cualquier medio, archivos de información de datos personales, datos sensibles o personales sensibles, protegidos por la presente ley sin contar con la autorización expresa por escrito del titular de los mismos y que no provengan de registros públicos, será sancionado con prisión de cinco a ocho años y multa de cincuenta mil a cien mil Quetzales y el comiso de los objetos instrumentos del delito.

La sanción penal se aplicará sin perjuicio de las responsabilidades civiles correspondientes y los daños y perjuicios que se pudieran generar por la comercialización o distribución de datos personales, datos sensibles o personales sensibles.

Artículo 65. Alteración o destrucción de información en archivos. Quien sin autorización, altere o destruya información de datos personales, datos sensibles o personales sensibles de una persona, que se encuentren en archivos, ficheros, soportes informáticos o electrónicos de instituciones públicas, será sancionado con prisión de cinco a ocho años y multa de cincuenta mil a cien mil Quetzales.



La sanción penal se aplicará sin perjuicio de las responsabilidades civiles correspondientes y los daños y perjuicios que se pudieran generar por la alteración o destrucción de información en archivos.

Artículo 66. Retención de información. Incurre en el delito de retención de información el funcionario, servidor público o cualquier persona responsable de cumplir la presente ley, que en forma arbitraria o injustificada obstruya el acceso del solicitante a la información requerida. Será sancionado con prisión de uno a tres años, con inhabilitación especial por el doble de la pena impuesta, y multa de diez mil a cincuenta mil Quetzales.

La sanción penal se aplicará sin perjuicio de las responsabilidades civiles correspondientes y los daños y perjuicios que se pudieran generar por la retención de la información.

Artículo 67. Revelación de información confidencial o reservada. El servidor, funcionario o empleado público que revelare o facilite la revelación de información de la que tenga conocimiento por razón del cargo y que por disposición de ley o de la Constitución Política de la República de Guatemala sea confidencial o reservada, será sancionado con prisión de cinco a ocho años e inhabilitación especial por el doble de la pena impuesta y multa de cincuenta mil a cien mil Quetzales.

La persona nacional o extranjera que teniendo la obligación de mantener en reserva o confidencialidad datos que por disposición de ley o de la Constitución Política de la República de Guatemala incurra en los hechos del párrafo anterior será sancionado de la misma forma.



La sanción penal se aplicará sin perjuicio de las responsabilidades civiles correspondientes y los daños y perjuicios que se pudieran generar por la revelación de la información confidencial o reservada.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES

Artículo 68. Conformación de Unidades de Información. Los sujetos obligados, en el ámbito de sus respectivas competencias conformaran e implementarán las Unidades de Información y actualizarán sus obligaciones de oficio dentro de los ciento ochenta días contados a partir de la vigencia de la presente ley.

Artículo 69. Presupuesto. En el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado se incluirá una partida específica adicional para que el Procurador de los Derechos Humanos pueda cumplir con las atribuciones establecidas en esta ley.

Artículo 70. Creación de Unidades. La creación de las unidades de información de los sujetos obligados no supondrá erogaciones adicionales en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, sino que deberán integrarse con los funcionarios públicos existentes, salvo casos debidamente justificados, a solicitud del sujeto obligado que forme parte del Estado dentro de la administración pública.

Artículo 71. Derogatoria. Se derogan todas aquellas disposiciones legales en lo que se opongan a lo dispuesto en la presente ley.

Artículo 72. Vigencia. La presente ley entrará en vigencia ciento ochenta días después de su publicación en el Diario Oficial. Se exceptúan de la fecha de entrada en vigencia el presente artículo y los artículos 6 y 68, los cuales entrarán en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial.



REMÍTASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN,
PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN.

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO,
EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, EL VEINTITRÉS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL OCHO.

ARÍSTIDES BALDOMERO CRESPO VILLEGAS
PRESIDENTE

JOSÉ ROBERTO ALEJOS CÁMBARA
SECRETARIO

ROSA ELVIRA ZAPETA OSORIO
SECRETARIA

PALACIO NACIONAL: Guatemala, veintidós de octubre del año dos mil ocho.

PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

COLOM CABALLEROS

Emilio Arnoldo Villagrán Campos
Primer Viceministro de Gobernación
Encargado del Despacho

Lic. Carlos Larios Ochaita
Secretario General
de la Presidencia de la República



“Para utilidad del lector se adiciona INCONSTITUCIONALIDAD GENERAL TOTAL Y PARCIAL EXPEDIENTES 1373-2009, 1412-2009 Y 1413-2009 dictada por la Corte de Constitucionalidad que interpretan aspectos relacionados al sujeto activo, publicación de salarios/honorarios y otros emolumentos, entre otras. Asimismo se adiciona APELACIÓN DE SENTENCIA EN AMPARO EXPEDIENTE 1083-2013 en la que se ilustra aspectos relacionados a los plazos estipulados para el trámite de solicitudes de acceso a la información pública.”



INCONSTITUCIONALIDAD GENERAL TOTAL Y PARCIAL

EXPEDIENTES 1373-2009, 1412-2009 Y 1413-2009

CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD INTEGRADA POR LOS MAGISTRADOS, ROBERTO MOLINA BARRETO, QUIEN LA PRESIDE, ALEJANDRO MALDONADO AGUIRRE, MARIO PÉREZ GUERRA, GLADYS CHACÓN CORADO, JUAN FRANCISCO FLORES JUÁREZ, HILARIO RODERICO PINEDA SÁNCHEZ Y VINICIO RAFAEL GARCÍA PIMENTEL: Guatemala, treinta de noviembre de dos mil diez.

Se tienen a la vista para dictar sentencia: **A)** la acción de inconstitucionalidad de carácter general parcial promovida por Carlos Enrique Velásquez Calderón, con su propio patrocinio y el de los abogados Ana Fabiola Cuyún González y Sergio José Ortiz Zepeda, contra los artículos: 1, numerales 1, en la frase "*Garantizar a toda persona interesada, sin discriminación alguna...*", 2, 3, 5, en la frase "*Establecer, a manera de excepción y de manera limitativa, los supuestos en que se restrinja el acceso a la información pública...*", y 7, en la frase "... garantizar que toda persona..."; 2, en la frase "... para garantizar a toda persona..."; 4; 5, en la frase "... Es toda persona..."; 8; 9, numeral 3, en la frase "*derecho que tiene toda persona*"; 16, en la frase "*Toda persona...*"; 21, en la frase "... la que por disposición expresa de una ley sea considerada confidencial, la información clasificada como reservada de conformidad con la presente ley y las que de acuerdo a tratados o convenios internacionales ratificados por el Estado de Guatemala tengan cláusula de reserva..."; 22, numerales 1 al 5; 23, numerales 3 al 7 y 9; y 41, último párrafo; de la Ley de Acceso a la Información Pública (Decreto 57-2008 del Congreso de la República); **B)** la acción de inconstitucionalidad de carácter general total promovida por Marco Antonio Chávez Tejada, con el patrocinio de los abogados Rafael Humberto Paredes Kress, Luz María Espinoza Vega y Daniela Alejandra Godínez López, contra el cuerpo legal identificado en la literal anterior; y **C)** la acción de inconstitucionalidad de carácter general parcial promovida también por el postulante identificado en la literal anterior, con el patrocinio de los mismos abogados, contra los artículos: 10, numeral 4, en la frase "... incluyendo salarios que corresponden a cada cargo, honorarios, dietas, bonos, viáticos o cualquier otra remuneración económica que perciban por cualquier concepto..."; 11, numeral 2, en la frase "... con sus respectivas remuneraciones de cada una de las instituciones mencionadas en el numeral anterior"; 12, numeral 5, en la frase "... con sus respectivas remuneraciones de cada uno de los tribunales mencionados en el numeral anterior..."; y 13, numeral 2, en la frase "... con sus respectivas remuneraciones..."; de la ley ya citada. Es ponente en este caso el Magistrado Vocal I, Alejandro Maldonado Aguirre, que expresa el parecer de este Tribunal.

ANTECEDENTES

I. FUNDAMENTO JURÍDICO DE LA IMPUGNACIÓN

Lo expuesto por los postulantes se resume: **A) Carlos Enrique Velásquez Calderón:** **A.1 Respecto a la violación al artículo 30 de la Constitución Política de la República, que le endilga a los artículos: 1, numerales 1, en la frase "Garantizar a toda persona interesada, sin discriminación alguna...", y 7, en la frase "... garantizar que toda persona..."; 2, en la frase "... para garantizar a toda persona..."; 5, en la frase "... Es toda persona..."; 9, numeral 3, en la frase "derecho que tiene toda persona"; 16, en la frase "Toda persona..."; y 41, último párrafo; del cuerpo legal cuestionado:** En el considerando tercero de la ley impugnada se lee "*Que la Carta Magna establece con absoluta determinación la publicidad*



de los actos y la información en poder de la administración pública, así como el libre acceso a todas las instituciones /dependencias y archivos de la misma, sin más excepciones que las previstas en el citado texto constitucional"; aunque no es cierto que en la Ley Fundamental exista referencia expresa a la publicidad de la información en poder de la administración pública, se deduce que se alude al artículo 30 constitucional ["*Todos los actos de la administración son públicos. Los interesados tienen derecho a obtener, en cualquier tiempo, informes, copias, reproducciones y certificaciones que soliciten y la exhibición de los expedientes que deseen consultar, salvo que se trate de asuntos militares o diplomáticos de seguridad nacional, o de datos suministrados por particulares bajo garantía de confidencialidad.*"], que es atinente a la publicidad de los actos administrativos; éstos últimos se caracterizan por ser declaraciones de naturaleza unilateral emanadas de las entidades públicas, que en una situación concreta recaen sobre derechos, intereses y obligaciones de los administrados. Lo anterior evidencia que la gran importancia que en esa norma posee la palabra *interesados*, que en su acepción jurídica –no común, ordinaria o coloquial– se refiere a aquellos que tienen un interés legítimo, personal y directo, es decir, personas físicas y jurídicas a las que los actos o disposiciones administrativas afecten o puedan afectar; definición que aparece reflejada en el Diccionario de la Lengua Española y en el artículo 31 de la Ley 4/1999, Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de la legislación española, y en varios preceptos del ordenamiento jurídico guatemalteco, tales como los artículos 40., 23, 40, 117 y 137 de la Constitución Política de la República; 10, 26, 29, 34, 35, 50, 109 y 194 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad; 65, 66, 116, 117, 138 y 182 de la Ley del Organismo Judicial; 3 y 22 de la Ley de lo Contencioso Administrativo; 39 de la Ley de Contrataciones del Estado; y 13 del Código Procesal Penal. Por el contrario, cuando el legislador ordinario o constituyente ha querido generalizar, ha utilizado pronombres como "*cualquier*", como por ejemplo en los artículos 134 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad [... d] *Cualquier persona con el auxilio de tres abogados colegiados activos...*"; 12 de la Ley de Emisión del Pensamiento [... *Dichos originales no podrán ser exhibidos o extraídos del archivo, sin el consentimiento de su autor, salvo cuando fueren requeridos por los tribunales en un juicio de imprenta (...) Cualquier persona podrá solicitar copia certificada de dichos artículos o escritos a su costa.*"]; 297 del Código Procesal Penal [*Cualquier persona deberá comunicar, por escrito u oralmente, a la policía, al Ministerio Público o al tribunal...*; y 171 de la Ley del Organismo Judicial [*Los expedientes de las actuaciones que practiquen los tribunales no deben salir fuera de la oficina, pudiendo darse a quienes lo soliciten, fotocopias simples o certificaciones...*]]. Queda corroborado entonces que el artículo 30 constitucional se refiere a la publicidad de los actos administrativos para los interesados en los mismos, y no para cualquier persona curiosa de tales actuaciones; de haber sido otra la intención del constituyente no habría utilizado la palabra *interesado*, sino habría redactado aquél precepto como aparece en las Constituciones de otros países, tales como: i. Constitución Portuguesa de mil novecientos setenta y seis, en su artículo 268: "... 2. Los ciudadanos [no los interesados] tendrán derecho de acceso a los archivos y registros administrativos, sin perjuicio de lo dispuesto por la ley en materias relativas a la seguridad interna y externa, la investigación criminal y la intimidad de las personas."; ii. Constitución Española de mil novecientos setenta y ocho, en su artículo 105: "La ley regulará: (...) b) El acceso de los ciudadanos [no de los interesados] a los archivos y registros administrativos, salvo en lo que afecte a la



seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas.”; iii. Constitución Brasileña de mil novecientos ochenta y ocho, en su artículo 5: “... XXXIII- Todos [no los interesados] tienen derecho a recibir de los órganos públicos informaciones de su interés particular, o de interés colectivo o general que serán suministradas dentro del plazo de ley, bajo pena de responsabilidad, salvo aquellas cuyo sigilo sea imprescindible para la seguridad de la sociedad o del Estado.”; iv. Constitución Colombiana de mil novecientos noventa y uno, en su artículo 74: “Todas las personas [no los interesados] tienen derecho a acceder a los documentos públicos salvo los casos que establezca la ley.”; v. Constitución Peruana de mil novecientos noventa y tres, en su artículo 2, numeral 5): “A solicitar sin expresión de causa [sin necesidad de demostrar la legitimación activa] la información que requiera y a recibirla de cualquier entidad pública, en el plazo legal, con el costo que suponga el pedido. Se exceptúan las informaciones que afectan la intimidad personal y las que expresamente se excluyan por ley o por razones de seguridad nacional.”; vi. Constitución de la Ciudad de Buenos Aires de mil novecientos noventa y seis, en su artículo 26, párrafo cuarto: “Toda persona [no los interesados] tiene derecho, a su solo pedido, a recibir libremente información sobre el impacto que causan o pueden causar sobre el ambiente actividades públicas o privadas.”; vii. Constitución de Ecuador, en su artículo 81: “El Estado garantizará el derecho a acceder a fuentes de información; a buscar, recibir, conocer y difundir información objetiva, veraz, plural, oportuna y sin censura previa, de los acontecimientos de interés general, que preserve los valores de la comunidad, especialmente por parte de periodistas y comunicadores sociales. No existirá reserva respecto de informaciones que reposen en los archivos públicos, excepto de los documentos para los que tal reserva sea exigida por razones de defensa nacional y por otras causas expresamente establecidas en la ley.”.

A.2 Respecto a la violación al artículo 278 de la Constitución Política de la República, que le endilga a los artículos: 1, numeral 5, en la frase “Establecer, a manera de excepción y de manera limitativa, los supuestos en que se restrinja el acceso a la información pública...”; 21, en la frase “... la que por disposición expresa de una ley sea considerada confidencial, la información clasificada como reservada de conformidad con la presente ley y las que de acuerdo a tratados o convenios internacionales ratificados por el Estado de Guatemala tengan cláusula de reserva.”; 22, numerales 1 al 5; 23, numerales 3 al 7; y 9 del cuerpo legal cuestionado: en el artículo 30 constitucional se establecen como excepciones al principio de publicidad de los actos administrativos: i. asuntos militares de seguridad nacional; ii. asuntos diplomáticos de la misma naturaleza; y iii. datos suministrados por particulares bajo garantía de confidencialidad; excepciones que deben ser tenidas como *numerus clausus*. Sin embargo, en el Capítulo V de la ley impugnada, relativo a la *Información confidencial y reservada*, el legislador ordinario fijó limitaciones adicionales a dicho principio en los artículos 21 al 23, con lo cual se arrojó la categoría de constituyente y conculcó el artículo 278 de la Carta Magna, en el que se le confiere en forma exclusiva a la Asamblea Nacional Constituyente la facultad para reformar el Capítulo I del Título II de la preceptiva constitucional –dentro del cual se ubica el referido artículo 30–. Esto además permite que la definición de qué es *información confidencial o reservada* quede a criterio de las autoridades de turno, con el peligro de manipulación política o anómala que ello implica. Solicitó que se declare con lugar la inconstitucionalidad planteada.

B) Marco Antonio Chávez Tejada: B.1 En su primer planteamiento, en que le endilga inconstitucionalidad general total al cuerpo legal cuestionado: De acuerdo a lo



preceptuado en el artículo 134 de la Constitución, interpretado en repetidas oportunidades por la Corte de Constitucionalidad, se requiere el voto de dos terceras partes del Congreso de la República para crear o suprimir un ente autónomo, con la finalidad de proteger su estructura, funciones y competencia; por ende, la misma mayoría es necesaria cuando se pretenda modificar tales elementos. No obstante, en la ley reprochada se establece: i. la creación de normas y procedimientos para que todas las personas puedan tener acceso a la información de registros, archivos, bancos o sistemas de datos en general, en todas las dependencias del Estado, incluyendo entidades descentralizadas y autónomas; ii. que todos los sujetos obligados deben actualizar su información en el plazo de treinta días; iii. el procedimiento para obtener de las instituciones respectivas la información; y iv. el deber de los sujetos obligados de tomar medidas de cuidado y conservación de los documentos, así como de instalar una unidad de información y rendir un informe anual al Procurador de Derechos Humanos. Con ello se realizan modificaciones a la estructura de las entidades que, gozando de autonomía, son parte de los sujetos obligados de esa ley, sin que la referida ley haya sido votada con la mayoría requerida para el efecto; consecuentemente, se evidencia su inconstitucionalidad formal, por lo que en resguardo del principio de supremacía constitucional, deben hacerse las declaraciones que en Derecho corresponden. Pidió que se acoga su planteamiento de inconstitucionalidad total.

B.2 En su segundo planteamiento, en que le endilga inconstitucionalidad general parcial a los artículos: 10, numeral 4, en la frase "... incluyendo salarios que corresponden a cada cargo, honorarios, dietas, bonos, viáticos o cualquier otra remuneración económica que perciban por cualquier concepto..."; 11, numeral 2, en la frase "... con sus respectivas remuneraciones de cada una de las instituciones mencionadas en el numeral anterior"; 12, numeral 5, en la frase "... con sus respectivas remuneraciones de cada uno de los tribunales mencionados en el numeral anterior"; y 13, numeral 2, en la frase "... con sus respectivas remuneraciones"; del cuerpo legal cuestionado:

Las referidas disposiciones hacen obligatorio que se proporcione indiscriminadamente información relativa a salarios, honorarios, dietas, bonos, viáticos o cualquier remuneración económica que perciban los funcionarios, servidores públicos, empleados y asesores que laboren en el Estado y sus dependencias. Ello vulnera los artículos 1º., 2º. y 3º. constitucionales, pues se somete a dichas personas y sus familias a un trato discriminatorio, así como a un grave riesgo en su patrimonio e integridad personal, al ser esa información propicia para que el crimen organizado, la delincuencia común y las estructuras de maras estén en la posibilidad de hacerlos objeto de extorsiones, secuestros, amenazas y atentados; el Estado, destinado a la protección de la persona y la familia –sin excepción–, de la vida, la libertad, la justicia, la seguridad y la paz, se convierte entonces en cómplice de esos ilícitos, ya que facilita la información necesaria para su comisión. En conclusión, en aras de la pretendida transparencia se sacrifican cándidamente los más importantes valores de la nación, debido a que el legislador, en aquel afán, no evaluó la grave situación de inseguridad que se vive en el país, descuidando los bienes jurídicos fundamentales a cargo del Estado. Solicitó que se declare la procedencia de su acción de inconstitucionalidad general.

II. TRÁMITE DE LA INCONSTITUCIONALIDAD

No se decretó la suspensión provisional del cuerpo legal impugnado. Se confirió audiencia por quince días al Presidente de la República, al Congreso de la República, al Procurador de los Derechos Humanos y al Ministerio Público. Oportunamente se señaló día y hora para la vista.



III. RESUMEN DE LAS ALEGACIONES

A) El Presidente de la República manifestó: **a)** los accionantes en ningún momento hacen relación de la ley ordinaria con la ley superior, pues se concretan a transcribir artículos constitucionales; la labor de interpretación comprende tanto la formalidad legal como la realidad legal y no puede existir un distanciamiento tal entre el formalismo constitucional y la realidad constitucional que ponga en peligro la institucionalidad; **b)** los legisladores están legitimados para dictar las medidas que, dentro de su concepción ideológica y sin infringir preceptos constitucionales, tiendan a la consecución del bien común, como expresión de la voluntad soberana del pueblo; **c)** por acto de la administración debe entenderse toda decisión, general o especial, de una autoridad administrativa en ejercicio de sus funciones y que se refiere a derechos, deberes e intereses de entidades administrativas o de los particulares respecto de ellas; **d)** el derecho a la información ha sido reconocido como un derecho humano universal constituido sobre el derecho a la libertad, según el tenor del artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; la doctrina, en su mayoría, enmarca en dicho derecho la transparencia de la administración pública y, además, lo toma como una característica fundamental del Estado de Derecho; **e)** el derecho de acceso a la información pública se basa en tres principios básicos: i. la transparencia, que con el paso del tiempo ha pasado a ser una exigencia que debe observar el Estado frente a todos los ciudadanos; ii. la publicidad, entendida como la accesibilidad general de las actuaciones administrativas, es un elemento del orden jurídico, que persigue lograr el conocimiento y control de tales actuaciones; y iii. la rendición de cuentas, que es la obligación de que los Organismos del Estado se controlen entre ellos para mantener el equilibrio en sus actuaciones; **f)** en cuanto al alcance de los términos "*interesados*" e "*interés legítimo*", cabe comparar su aplicación en otras legislaciones, como las de Estados Unidos de América y Francia, que utilizan de manera extensiva las palabras "*persona*" y "*beneficiarios*", bastando la mera curiosidad del administrado para poder hacer valer el derecho de acceso a la información pública y obtener la documentación que sea necesaria. Ya que se trata de un derecho que emana de la libertad misma, puede razonarse que al momento en que cualquier persona lo invoca, se transforma en un interesado sobre el tema o acto administrativo; es decir, todo individuo en su calidad de administrado en un territorio soberano posee un interés legítimo en conocer la manera en que se manejan sus autoridades; **g)** el espíritu de la Ley de Acceso a la Información Pública es salvaguardar el derecho al libre acceso a la información protegido precisamente en el artículo 30 de la Constitución Política de la República, contrario a lo afirmado por uno de los postulantes, de que entre ambos cuerpos existe colisión, al enumerarse algunas causas de excepción al principio de publicidad; en todo Estado democrático es normal que sea necesario mantener en secreto cierta documentación para asegurar su existencia, pero la regla general es la publicidad; y **h)** la Corte de Constitucionalidad en reiterados fallos ha expresado que la declaración de inconstitucionalidad general sólo es viable cuando se advierta con certeza y fundamento suficientes la contradicción de las normas atacadas con las normas de superior jerarquía invocadas por medio de un estudio comparativo; no obstante, en los planteamientos que se analizan, los accionantes se limitan a relacionar una serie de artículos constitucionales, sin que de manera clara, concreta, razonada, individualizada y jurídicamente motivada expresen en qué radica la contravención del texto constitucional. Pidió que se declaren sin lugar los planteamientos de inconstitucionalidad general objeto de pronunciamiento. **B) El Congreso de la**



República expuso: B.1 Respeto al planteamiento formulado por Carlos Enrique Velásquez Calderón: a) el artículo 30 de la Carta Magna es claro en establecer que todos los actos de la administración son públicos, y que los interesados tienen derecho a obtener en cualquier tiempo, informes, copias, reproducciones y certificaciones que soliciten y la exhibición de los expedientes que deseen consultar, determinando con precisión las excepciones a ese mandato; es decir, no se refiere a lo que se conoce como la materialización de la administración pública mediante el acto administrativo propiamente dicho, que según *Canasi*, constituye la base esencial de la actividad jurídica del Estado, en sentido lato, y regula la función administrativa, ya sea en forma de actos jurídicos o actos materiales. Según *Cermesoni*, acto administrativo es aquella manifestación unilateral y externa de voluntad que expresa una decisión de autoridad administrativa competente, que en ejercicio de la potestad pública crea, reconoce, modifica, transmite o extingue derechos u obligaciones, generalmente es ejecutivo y se propone satisfacer el interés general; por su parte, la administración pública a que se refiere la norma constitucional es un concepto más amplio, tiene que ver con el manejo de la cosa pública, que interesa a todo ciudadano, al que se reconoce un derecho subjetivo que conlleva como único presupuesto acreditar que deriva del propio albedrío del gobernado, congruente con el principio de transparencia de los actos públicos; y b) la Ley de Acceso a la Información Pública no contiene ninguna vulneración al artículo 278 constitucional, pues, por el contrario, lo que el legislador persigue con dicho cuerpo legal es precisamente regular la manera de hacer efectiva la obligación de publicidad de los actos administrativos.

B.2 Respeto a los planteamientos formulados por Marco Antonio Chávez Tejada: los señalamientos de inconstitucionalidad son superficiales y no conllevan análisis que evidencie una verdadera lesión de normas constitucionales; carecen de la expresión del interponente en forma separada, razonada y clara de los motivos jurídicos en que descansa su planteamiento. Solicitó que las referidas acciones de inconstitucionalidad sean declaradas sin lugar. C) El Ministerio Público expresó: C.1 Consideraciones generales: a) La promulgación, sanción y publicación de la Ley de Acceso a la Información Pública representa un esfuerzo efectuado por la población guatemalteca y por entidades nacionales e internacionales con el propósito de transparentar los actos de la administración pública y consagrar el derecho de las personas a acceder a la información en poder de la administración pública y a todos los actos, entes e instituciones que manejan recursos del Estado bajo cualquier concepto; b) debe destacarse que el movimiento originado con el fin de obtener el libre acceso a la información pública no es exclusivo de Guatemala, es el resultado de la preocupación a nivel internacional por el tema; de hecho, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos creó una Relatoría Especial para la Libertad de Expresión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció, en la sentencia dictada en el caso Claude Reyes y otros vs. Chile, que toda persona, sin necesidad de acreditar un interés especial, tiene el derecho de acceso a la información que el Estado administre o produzca o que deba administrar o producir; asimismo, la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos se ha pronunciado reiteradamente sobre la importancia del derecho de acceso a la información y el Comité Jurídico Interamericano aprobó en su septuagésimo tercer período ordinario de sesiones una resolución en la que se reconocen los estándares interamericanos acerca de la materia; y c) en toda Latinoamérica han sido sancionadas leyes que garantizan dicho derecho; en Chile recién entró en vigencia la Ley sobre Transparencia de la Función Pública y Acceso a la Información del Estado, ejemplo



que se suma a nueve países de la región que cuentan con una ley nacional que regula el acceso a la información pública: Colombia, Ecuador, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay. **C.2 ResPECTO AL planteamiento formulado por Carlos Enrique Velásquez Calderón:** a) no se aprecia confrontación necesaria para que pueda ser analizada la constitucionalidad que se denuncia, pues únicamente se hace alusión a cuestiones subjetivas de interpretación, sin indicar en forma técnica razón jurídica alguna que justifique su impugnación; b) tanto el artículo 30 constitucional como el 1, numeral 1, de la Ley de Acceso a la Información Pública, garantizan el derecho de los interesados de acceder a la información *in concreto*; sin embargo, el derecho a la información pública lo ejerce cualquier persona *in genere*, convirtiéndose la persona en interesado cuando concretiza su petición; c) en el artículo 13, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos está preceptuado que *"Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección"*, es decir, contempla un derecho general, no limitado a los interesados; en el ya citado caso de Claude y otros vs. Chile, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró [en el párrafo setenta y siete del fallo] que *"... el artículo 13 de la Convención, al estipular expresamente los derechos a 'buscar' y a 'recibir' 'informaciones', protege el derecho que tiene toda persona a solicitar el acceso a la información bajo el control del Estado, con las salvedades permitidas bajo el régimen de restricciones de la Convención. Consecuentemente, dicho artículo ampara el derecho de las personas a recibir dicha información y la obligación positiva del Estado de suministrárla, de forma tal que la persona pueda tener acceso a conocer esa información o reciba una respuesta fundamentada cuando por algún motivo permitido por la Convención el Estado pueda limitar el acceso a la misma para el caso concreto. Dicha información debe ser entregada sin necesidad de acreditar un interés directo para su obtención o una afectación personal, salvo en los casos en que se aplique una legítima restricción..."*; d) si bien es cierto que existen excepciones al derecho de acceso a la información, deben cumplir con determinados requisitos, tales como que tienen que estar fijadas en la ley, no en actos administrativos, y que las causales deben ser compatibles con el funcionamiento de una sociedad democrática fundada en la transparencia; y e) no se lesiona el contenido del artículo 278 de la Constitución Política de la República, por cuanto no se está reformando ésta, sino que se desarrolla el derecho de acceso a la información pública previsto intrínsecamente en el artículo 30 constitucional y en el 13, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. **C.3 ResPECTO AL PRIMER planteamiento formulado por Marco Antonio Chávez Tejada:** a) en el presente caso debe observarse el principio de supremacía constitucional, que sujetla la normativa legal a la Ley Fundamental, aplicado en innumerables ocasiones por la Corte de Constitucionalidad; b) no debe confundirse autonomía con autarquía funcional, pues aunque en el artículo 134 de la Constitución Política de la República expresamente se les reconoce autonomía a los municipios y a otras entidades estatales, esto no significa que puedan actuar con total desvinculación del sistema político o el ordenamiento jurídico, pues no dejan de pertenecer al Estado, siendo que actúan por delegación de éste y deben coordinarse con su política general; por ello, no se evidencia vulneración al referido artículo constitucional, máxime si se toma en cuenta que no conlleva modificaciones que alteren su esencia, estructura, funciones o competencia, ni ninguna reforma que



concluye el principio de rigidez –requerimiento de mayoría de dos terceras partes–; y **c)** por el contrario, con la normativa cuestionada se está acatando uno de los diez estándares mínimos que deben ser cumplidos en América Latina para respetar el derecho al acceso a la información pública de los ciudadanos, emitidos por la Relatora para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos en la Primera Conferencia Nacional sobre Acceso a la Información: “*8. Las entidades públicas deben implementar mecanismos permanentes y accesibles de transparencia y difusión de la información, que permitan el acceso rápido y a bajo costo de la información pública*”.

C.4 Respecto al segundo planteamiento formulado por Marco Antonio Chávez

Tejada: **a)** la información que posee el Estado es pública, por lo que su actuar debe encontrarse regido por los principios de publicidad y transparencia en la gestión pública, a fin de combatir la corrupción e impulsar la rendición de cuentas; es por ello que se ha establecido la publicidad de los salarios que se devengan en puestos estatales, los cuales pueden ser conocidos por los ciudadanos conforme el derecho que les asiste al tenor del artículo 30 constitucional; y **b)** sobre el particular, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el citado caso Claude y otros vs. Chile, declaró [en el párrafo noventa y dos del fallo] que: “... en una sociedad democrática es indispensable que las autoridades estatales se rijan por el principio de máxima divulgación, el cual establece la presunción de que toda información es accesible, sujeto a un sistema restringido de excepciones”; de suerte que el acceso a la información de salarios no violenta lo preceptuado en el artículo 30 de la Carta Magna y se encuentra acorde con otras legislaciones latinoamericanas de la materia, además de estar en armonía con lo dispuesto en el ya citado artículo 13, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Pidió que las acciones intentadas sean declaradas improcedentes. **D)** El Procurador de Derechos Humanos no alegó.

IV. ALEGATOS EN EL DÍA DE LA VISTA

A) El Presidente de la República, el Congreso de la República y el Ministerio Público reiteraron lo expuesto y solicitado con ocasión de la audiencia que les fuera conferida anteriormente dentro del trámite de la inconstitucionalidad. **C)** Carlos Enrique Velásquez Calderón, Marco Antonio Chávez **–postulantes–**, y el **Procurador de los Derechos Humanos** no alegaron.

CONSIDERANDO

---I---

Al tenor de lo preceptuado en los artículos 267 de la Constitución Política de la República y 133 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, la *Inconstitucionalidad de leyes, reglamentos y disposiciones de carácter general* es el instrumento destinado al control directo, abstracto y reparador de constitucionalidad, sobre las normas infraconstitucionales que conforman el ordenamiento jurídico guatemalteco. Su conocimiento se ha encomendado con exclusividad a este tribunal, responsable de la defensa del orden constitucional y del principio de supremacía constitucional.

---II---

Una percepción integral de las presentes acciones de inconstitucionalidad, incoadas contra la Ley de Acceso a la Información Pública (Decreto 57-2008 del Congreso de la República), permite advertir que la materia del fallo de mérito está constituida por cuatro puntos: primero, el acuse de violación al artículo 30 de la Carta Magna que Carlos Enrique Velásquez Calderón formula con relación a sus artículos: 1, numerales 1, en la frase



"Garantizar a toda persona interesada, sin discriminación alguna...", y 7, en la frase "... garantizar que toda persona..."; 2, en la frase "... para garantizar a toda persona..."; 5, en la frase "... Es toda persona..."; 9, numeral 3, en la frase "derecho que tiene toda persona"; 16, en la frase "Toda persona..."; y 41, último párrafo; de la referida Ley. Segundo, la vulneración del artículo 278 que el mismo postulante atribuye a sus artículos: 1, numeral 5, en la frase "Establecer, a manera de excepción y de manera limitativa, los supuestos en que se restrinja el acceso a la información pública..."; 21, en la frase "... la que por disposición expresa de una ley sea considerada confidencial, la información clasificada como reservada de conformidad con la presente ley y las que de acuerdo a tratados o convenios internacionales ratificados por el Estado de Guatemala tengan cláusula de reserva.>"; 22, numerales 1 al 5; 23, numerales 3 al 7; y 9. Tercero, el vicio de inconstitucionalidad formal que Marco Antonio Chávez Tejada endilga a la totalidad de su articulado. Y cuarto, la contravención material de los artículos 1º., 2º. y 3º. de la Constitución Política de la República que este último le reputa específicamente a sus artículos: 10, numeral 4, en la frase "... incluyendo salarios que corresponden a cada cargo, honorarios, dietas, bonos, viáticos o cualquier otra remuneración económica que perciban por cualquier concepto..."; 11, numeral 2, en la frase "... con sus respectivas remuneraciones de cada una de las instituciones mencionadas en el numeral anterior.>"; 12, numeral 5, en la frase "... con sus respectivas remuneraciones de cada uno de los tribunales mencionados en el numeral anterior.>"; y 13, numeral 2, en la frase "... con sus respectivas remuneraciones.>".

El primero de los solicitantes antes mencionados indicó en su escrito inicial que también reprochaba inconstitucionalidad a los artículos 1, numerales 2 y 3; 4; y 8; del cuerpo legal cuestionado; sin embargo, ninguna argumentación desplegó respecto a estos preceptos, por lo que esa falencia insubsanable impide que este Tribunal realice análisis alguno sobre los mismos.

---III---

Por cuestión de método, se dispondrá en primer lugar el estudio del tercero de los puntos enumerados en el apartado precedente, por referirse a un presunto vicio de inconstitucionalidad total, de naturaleza *interna corporis*. Marco Antonio Chávez Tejada alega que en la ley cuestionada se realizan modificaciones a la estructura de las entidades que, gozando de autonomía, son parte de los sujetos obligados de esa preceptiva, sin que ésta haya sido votada con la mayoría requerida para el efecto; pues establece: i. la creación de normas y procedimientos para que todas las personas puedan tener acceso a la información de registros, archivos, bancos o sistemas de datos en general, en todas las dependencias del Estado, incluyendo entidades descentralizadas y autónomas; ii. que todos los sujetos obligados deben actualizar su información en el plazo de treinta días; iii. el procedimiento para obtener de las instituciones respectivas la información; y iv. el deber de los sujetos obligados de tomar medidas de cuidado y conservación de los documentos, así como de instalar una unidad de información y rendir un informe anual al Procurador de Derechos Humanos.

Sobre el particular es oportuno resaltar que esta Corte ha sostenido reiteradamente, mediante ejercicio interpretativo de lo preceptuado en el artículo 134 de la Carta Magna, que la previsión especial que atañe a las entidades dotadas de autonomía, en cuanto al modo en que es dable que se produzca su creación y supresión –por decisión tomada por el Congreso de la República con el voto favorable de la mayoría de dos terceras partes de sus miembros–, debe entenderse extendida al supuesto de que se



pretenda variar a tal grado su regulación, que conlleve mutación de su estructura, funciones y competencia; esto es, una alteración de su esencia institucional dentro del entramado estatal.

Siguiendo esa línea jurisprudencial ha declarado la inconstitucionalidad de decretos mediante los cuales, verbigracia, se pretendió modificar, sin cumplir con el procedimiento necesario para ello: la integración de la Junta Directiva del Instituto Nacional de Bosques [Expedientes acumulados tres y trece-dos mil uno (3/13-2001)]; el tiempo de duración y calidades requeridas para optar al cargo, de los miembros del órgano homólogo del Fondo de Inversión Social [Expediente ciento noventa y nueve-dos mil dos (199-2002)]; y las funciones propias del Banco de Guatemala [Expedientes acumulados novecientos noventa y cuatro, novecientos noventa y cinco y mil nueve-dos mil tres (994/995/1009-2003)]. De igual manera, este tribunal ha denegado las pretensiones de inconstitucionalidad incoadas contra disposiciones a las que no ha reconocido incidencia relevante en los aspectos antes relacionados –estructura, funciones y competencia– de las instituciones autónomas o descentralizadas respectivas; tal fue el caso, por ejemplo, de la impugnación intentada contra la Ley General de Electricidad, en la que por la razón indicada no prosperó la tesis de vulneración de la autonomía del Instituto Nacional de Electrificación aducida [Expediente ochenta y cinco-noventa y siete (85-97)]; así como con ocasión de planteamiento promovido contra el Reglamento de la Junta de Exclusión de Activos y Pasivos, al que se le reputó sin éxito la afectación de las funciones propias de la Superintendencia de Bancos y la Junta Monetaria [Expediente dos mil setecientos trece-dos mil nueve (2713-2009)].

Es en la última categoría descrita que se enmarca el cuestionamiento objeto de estudio, pues la creación de normas y procedimientos para que todas las personas puedan tener acceso a la información que obra en registros, archivos, bancos o sistemas de datos de las dependencias del Estado es un mandato general que concierne a todo estamento del poder público, y no repercuta en la esfera de atribuciones, ámbito de competencia o estructura esencial de las entidades descentralizadas o autónomas. La sola circunstancia de que deba implementarse una oficina o unidad destinada al cumplimiento de ese deber, junto con determinados formularios o procedimientos internos –para operativizar su funcionamiento–, no puede considerarse como causa de alteración de aquellos aspectos.

De esa suerte, no era necesario que el organismo parlamentario contara con el voto favorable de la mayoría calificada para concretar válidamente la aprobación de la ley cuestionada y, por ende, carece de sustento la afirmación de que ésta adolece de vicio de inconstitucionalidad formal.

Superado ese punto, a continuación se abordarán los restantes en el orden en que fueron enumerados al inicio del considerando II.

---IV---

Carlos Enrique Velásquez Calderón le atribuye violación del artículo 30 de la Ley Fundamental a los artículos: 1, numerales 1, en la frase "*Garantizar a toda persona interesada, sin discriminación alguna...*", y 7, en la frase "... garantizar que toda persona..."; 2, en la frase "... para garantizar a toda persona..."; 5, en la frase "... Es toda persona..."; 9, numeral 3, en la frase "*derecho que tiene toda persona*"; 16, en la frase "*Toda persona...*"; y 41, último párrafo, de la ley impugnada.

Afirmó que la significación del referido precepto constitucional debe estimarse circunscrita a la publicidad de los actos administrativos y que, en todo caso, de ésta solamente deben beneficiarse los que tengan interés *personal, legítimo y directo* en dichas



actuaciones; por lo que, al obviarse esos extremos en los pasajes cuestionados, en los que se hace referencia al acceso a la información pública en general y se le concede esa prerrogativa a cualquier ciudadano, se contraviene lo dispuesto en la Constitución Política de la República.

Para analizar tal apreciación conviene acotar que en el contexto de la interpretación constitucional siempre debe privilegiarse la intelección que capte de mejor manera la dimensión material de la preceptiva fundamental y, por ende, coadyuve a proteger eficazmente los derechos, valores y bienes jurídicos inmersos en ésta, en abono de su fuerza normativa. En lo que concierne concretamente al artículo 30 de la Carta Magna [“*Publicidad de los actos administrativos. Todos los actos de la administración son públicos. Los interesados tienen derecho a obtener, en cualquier tiempo, informes, copias, reproducciones y certificaciones que soliciten y la exhibición de los expedientes que deseen consultar, salvo que se trate de asuntos militares o diplomáticos de seguridad nacional, o de datos suministrados por particulares bajo garantía de confidencialidad.*”], esta Corte identifica en su contenido, desde la perspectiva amplia y tutelar que aconseja el principio *pro homine*, el reconocimiento constitucional del *derecho al acceso a la información pública* en el ordenamiento jurídico guatemalteco, que supone la posibilidad para cualquier ciudadano de obtener información de la Administración Pública, sin otro interés que acreditar que el que proviene de su propio albedrío como administrado, en conexión con el principio de transparencia de la gestión pública [Sentencia de trece de septiembre de mil novecientos ochenta y nueve, dictada por este tribunal dentro del expediente ciento cincuenta y ocho-ochenta y nueve (178-89)].

De igual manera, con esos alcances figura concebido el indicado derecho en varios instrumentos de derecho internacional surgidos en el marco de instancias regionales y mundiales de protección de Derechos Humanos, a las que Guatemala está adscrita, en los que se le alude como componente de la libertad de expresión y, como tal, elemento primordial de la vocación democrática de los Estados.

Así, dentro del Sistema de la Organización de las Naciones Unidas, vale destacar lo enunciado en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos: “*Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir información y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.*”; postulado recogido en el artículo 19, numeral 2, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: “*Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión, este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística o por cualquier otro procedimiento de su elección.*”. Con mayor especificidad, en el artículo 10 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción está plasmada la incidencia del acceso ciudadano a la información pública, en función de asegurar la transparencia en el manejo de los asuntos del Estado: “*Información pública. Habida cuenta de la necesidad de combatir la corrupción, cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, adoptará las medidas que sean necesarias para aumentar la transparencia en su administración pública (...) instauración de procedimientos o reglamentaciones que permitan al público en general obtener, cuando proceda, información sobre la organización, el funcionamiento y los procesos de adopción de decisiones de su administración pública (...) simplificación de los procedimientos administrativos, cuando proceda, a fin de facilitar el acceso del público a*



las autoridades encargadas de la adopción de decisiones..."; lo cual es complementado con lo dispuesto en el artículo 13 del mismo cuerpo normativo, en cuyo inciso b se precisa que garantizar el acceso eficaz de la población a la información fomenta la participación activa de personas y grupos que no pertenezcan al sector público, en la prevención y la lucha contra la corrupción.

En el plano de la Organización de los Estados Americanos y el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, el texto del artículo 13, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, prácticamente replica el del ya citado artículo 19, numeral 2, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Y en la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión, elaborada por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos y aprobada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el acceso a la información pública es taxativamente catalogado como un derecho fundamental que los Estados están obligados a garantizar; en el estudio denominado *Antecedentes e Interpretación de la Declaración de Principios* [<http://www.cidh.org/relatoria/showarticle.asp?artID=132&IID=2>], numerales 18 y 19, la relacionada Relatoría puso de relieve la estrecha vinculación de dicho derecho con la necesidad de la población de fiscalizar las acciones del aparato gubernamental, como manifestación de su poder soberano: "... *Este derecho cobra aún mayor importancia por encontrarse íntimamente relacionado al principio de transparencia de la administración y la publicidad de los actos de gobierno. El Estado, en este sentido, se constituye como un medio para alcanzar el bien común. Dentro de este contexto, el titular de la información es el individuo que delegó en los representantes el manejo de los asuntos públicos (...) Sin esta información, no puede ejercitarse plenamente el derecho a la libertad de expresión como un mecanismo efectivo de participación ciudadana ni de control democrático de la gestión gubernamental...*".

Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en sentencia de diecinueve de septiembre de dos mil seis, se apoyó en las citadas Convenciones Americana sobre Derechos Humanos y de las Naciones Unidas contra la Corrupción, además de otros instrumentos como la Carta Democrática Interamericana, la Declaración de Nuevo León y varias resoluciones de la Asamblea de la Organización de Estados Americanos, para resolver el caso *Claude Reyes y otros versus Chile* [mencionado por el Ministerio Público al evacuar la vista que le fuera conferida dentro del presente proceso]. Con esa base, definió expresamente al acceso a la información pública como derecho humano integrante del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, sin reserva de acreditación de interés directo –como norma general–: "... *el artículo 13 de la Convención, al estipular expresamente los derechos a 'buscar' y a 'recibir' 'informaciones', protege el derecho que tiene toda persona a solicitar el acceso a la información bajo el control del Estado, con las salvedades permitidas bajo el régimen de restricciones de la Convención. Consecuentemente, dicho artículo ampara el derecho de las personas a recibir dicha información y la obligación positiva del Estado de suministrárla, de forma tal que la persona pueda tener acceso a conocer esa información o reciba una respuesta fundamentada cuando por algún motivo permitido por la Convención el Estado pueda limitar el acceso a la misma para el caso concreto. Dicha información debe ser entregada sin necesidad de acreditar un interés directo para su obtención o una afectación personal, salvo en los casos en que se aplique una legítima restricción (...) De esta forma, el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión contempla la protección del derecho*



*de acceso a la información bajo el control del Estado... [Párrafos setenta y siete (77)]"; y patentizó la importancia de ese derecho como vehículo de participación ciudadana dentro de un sistema democrático, orientado a garantizar la transparencia de las actividades del gobierno: "... La Asamblea General de la OEA en diversas resoluciones consideró que el acceso a la información pública es un requisito indispensable para el funcionamiento mismo de la democracia (...) el actuar del Estado debe encontrarse regido por los principios de publicidad y transparencia en la gestión pública, lo que hace posible que las personas que se encuentran bajo su jurisdicción ejerzan el control democrático de las gestiones estatales, de forma tal que puedan cuestionar, indagar y considerar si se está dando un adecuado cumplimiento de las funciones públicas. El acceso a la información bajo el control del Estado, que sea de interés público, puede permitir la participación en la gestión pública, a través del control social que se puede ejercer con dicho acceso (...) Al permitir el ejercicio de ese control democrático se fomenta una mayor participación de las personas en los intereses de la sociedad... [Párrafos ochenta y cuatro (84), ochenta y seis (86) y ochenta y siete (87)]". Y sobre el interés público como factor que determina la publicidad de la información, puntualizó, en pronunciamiento de veinte de noviembre de dos mil nueve, dictado en el caso *Usón Ramírez versus Venezuela*: "... en una sociedad democrática las instituciones o entidades del Estado como tales están expuestas al escrutinio y la crítica del público, y sus actividades se insertan en la esfera del debate público. Este umbral no se asienta en la calidad del sujeto, sino en el interés público de las actividades que realiza (...) Tales son las demandas del pluralismo propio de una sociedad democrática, que requiere la mayor circulación de informes y opiniones sobre asuntos de interés público...".*

En conclusión, la apropiada exégesis del artículo 30 de la Ley Fundamental, a la luz del principio *pro homine* y de la jurisprudencia y estándares internacionales en materia de derechos humanos aplicables, conduce a establecer que el referido precepto constitucional encierra el reconocimiento expreso de que todos los actos de la administración son públicos –pese al equívoco que puede propiciar su epígrafe, que en todo caso carece de contenido normativo–; así como del derecho de la población de acceder a esa información, como titular de la soberanía nacional, de la que sus poseedores son sólo mandatarios. Ello explica que para ejercerlo el ciudadano no tenga más que manifestar su legítima voluntad de conocer la organización, el funcionamiento y los procesos de adopción de decisiones del aparato gubernamental destinado a procurar su bienestar y el de sus pares; es en esto que se entiende configurado su *interés* sobre el asunto de que se trate, y no en la acepción netamente procesal del vocablo, que queda descontextualizada al ser desecharla la tesis de que la publicidad de los actos administrativos es el único objeto de la disposición de mérito.

De esa suerte, no adolecen de vicio de inconstitucionalidad alguno los fragmentos conducentes de los artículos 1, numerales 1 y 7; 2; 5; 9, numeral 3; 16; y 41, último párrafo; de la ley impugnada –que tienen por elemento común la expresión “*toda persona*”–; que acertadamente retratan el carácter universal del derecho de acceso a la información pública, en concordancia con lo antes apuntado.

---V---

Es menester precisar que el contorno del derecho de marras está definido también en función de ciertas limitaciones, que constituyen salvedades al *principio de máxima divulgación* que en general lo informa [positivado en los artículos 3, inciso 1; 8; y 9, numeral 8, de la ley impugnada, con la denominación de *principio de máxima publicidad*],



como lo asentaron el Relator Especial de las Naciones Unidas para la Libertad de Opinión y Expresión, el Representante de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa para la Libertad de los Medios de Comunicación y el Relator Especial de la Organización de Estados Americanos para la Libertad de Expresión, en declaración conjunta publicada en dos mil cuatro: “*El derecho de acceso a la información en poder de las autoridades públicas es un derecho humano fundamental que debería aplicarse a nivel nacional a través de legislación global (por ejemplo, las Leyes de Libertad de Acceso a Información) basada en el principio de máxima divulgación, el cual establece la presunción de que toda la información es accesible, sujeto solamente a un sistema restringido de excepciones (...) cuidadosamente adaptado para proteger los intereses públicos y privados preponderantes, incluida la privacidad. Las excepciones se aplicarán solamente cuando exista el riesgo de daño sustancial a los intereses protegidos y cuando ese daño sea mayor que el interés público en general de tener acceso a la información. La autoridad pública que procure denegar el acceso debe demostrar que la información está amparada por el sistema de excepciones..*”; conceptos que quedaron reflejados en similares términos en el ya aludido fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso *Claude Reyes y otros versus Chile* [Párrafos noventa y dos (92) y noventa y tres (93)].

En el caso de Guatemala, algunas de esas limitaciones o excepciones al principio de máxima divulgación están explícitamente previstas en la propia Carta Magna; concretamente, en la parte final de su artículo 30, que describe dos supuestos: i) asuntos militares o diplomáticos de seguridad nacional; y ii) datos suministrados por particulares bajo garantía de confidencialidad. Como puede verse, ambos son correlativos a *intereses públicos y privados preponderantes* –para usar la terminología de los relacionados relatores–: por un lado, la seguridad nacional como componente primordial de la institucionalidad misma del país; y por el otro, la información entregada por particulares con reserva de confidencialidad como cuestión conectada directamente con el derecho a la intimidad o vida privada, protegido en los artículos 23, 24 y 44 de la Constitución Política de la República; 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; y 14 y 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Son *intereses preponderantes* como los mencionados los que constituyen, taxativamente positivados o no, los límites naturales del acceso a la información pública, en el entendido de que dicha expresión evoca principios, valores y derechos fundamentales que igualmente se encuentran tutelados a nivel constitucional y que, por ende, deben ser ponderados en forma armónica con aquél.

Para robustecer lo anterior, cabe apuntar que el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas [en su observación general número diez, numeral cuatro (4)], la Corte Interamericana de Derechos Humanos [al emitir la sentencia del caso *Claude Reyes y otros versus Chile*, párrafos ochenta y ocho (88) a noventa y uno (91)] y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos [en su informe general sobre el derecho de acceso a la información de dos mil nueve, numerales veintinueve (29) a treinta y dos (32)], coinciden en afirmar que en la limitación al derecho que se estudia deben concurrir tres requisitos: i) que sea fijada en ley; ii) que obedezca a una de las dos razones precisadas en los artículos 19, tercer párrafo, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 13, numeral dos, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: el respeto a los derechos o a la reputación de los demás; o la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas; y iii) que sea necesaria para satisfacer los propósitos



antedichos, como un interés público imperativo; en el sentido de que sea conducente para el efecto, proporcional al interés que la justifica, y que interfiera en el menor grado posible en el ejercicio efectivo del derecho.

--VI--

Una vez fijados de ese modo los parámetros que rigen el régimen de excepciones al principio de máxima divulgación, puede abordarse el análisis de los motivos de contravención al artículo 278 constitucional que Carlos Enrique Velásquez Calderón reputa a los artículos: 1, numeral 5, en la frase "*Establecer, a manera de excepción y de manera limitativa, los supuestos en que se restrinja el acceso a la información pública...*"; 21, en la frase "... la que por disposición expresa de una ley sea considerada confidencial, la información clasificada como reservada de conformidad con la presente ley y las que de acuerdo a tratados o convenios internacionales ratificados por el Estado de Guatemala tengan cláusula de reserva."; 22, numerales 1 al 5; 23, numerales 3 al 7; y 9 de la ley impugnada.

Debe iniciarse por puntualizar que tanto el principio de rigidez constitucional como el de supremacía constitucional obedecen al valor superior que dentro del ordenamiento jurídico entraña la Ley Fundamental; uno a nivel formal y el otro, material. No cabe endilgar pretensión modificatoria de su texto a una norma legal que, al regular un determinado aspecto de la convivencia social, desarrolle congruentemente su contenido. *Ergo*, la sola circunstancia de que en el artículo 1, numeral 5, del cuerpo legal impugnado se indique que en éste se describirán los supuestos en que puede válidamente restringirse el acceso a la información pública no atenta contra el principio de rigidez constitucional, en la medida en que tales supuestos se limiten a pormenorizar las condiciones en que pueden configurarse los postulados generales demarcados en la Carta Magna. Este argumento se hace extensivo al fragmento cuestionado del artículo 21 ibídem, que se limita a enunciar una clasificación cuyos componentes son desplegados en los dos artículos subsiguientes, también refutados en esta vía –en el párrafo posterior se analizarán los supuestos específicos bajo cuestionamiento–; salvo lo relativo a cláusulas de reserva establecidas en tratados o convenios internacionales, que en todo caso podrán ser sometidas al control preventivo de constitucionalidad cuando se presente alguna en particular, antes de que el instrumento de que se trate sea ratificado y se perfeccione como obligación internacional para el Estado de Guatemala.

En el artículo 22 están enumerados una serie de casos en que a juicio del legislador la información se engloba en el concepto de *información confidencial*, que de acuerdo al artículo 9, numeral 5, de la misma ley, "*Es toda información en poder de los sujetos obligados que por mandato constitucional, o disposición expresa de una ley tenga acceso restringido, o haya sido entregada por personas individuales o jurídicas bajo garantía de confidencialidad*"; respecta a cinco de ellos versa el planteamiento que se resuelve, por lo que acto seguido se examina su compatibilidad constitucional:

A. "La expresamente definida en el artículo veinticuatro de la Constitución Política de la República de Guatemala [numeral 1]". Se recoge el principio constitucional de inviolabilidad de correspondencia, documentos y libros, que constituye una vertiente del derecho a la intimidad y vida privada que está protegida, no sólo en el precepto citado, sino en los artículos 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

B. "La expresamente definida como confidencial en la Ley de Bancos y Grupos Financieros [numeral 2]". Caso de excepción que remite al artículo 63 de la Ley de Bancos



y Grupos Financieros (Decreto 19-2002 del Congreso de la República), en el que está preceptuado que, salvo que medie orden de juez competente, los miembros de la Junta Monetaria y las autoridades, funcionarios y empleados del Banco de Guatemala y de la Superintendencia de Bancos tienen proscrito revelar la información que les es suministrada por los bancos del sistema para el ejercicio de las funciones que les encomienda la ley, y que a su vez proviene de la entrega que de la misma hacen los cuentahabientes con la implícita convicción de que será resguardada su confidencialidad, protegida por el artículo 30 constitucional y las disposiciones de derecho internacional nombradas en la literal anterior.

C. “*La información calificada como secreto profesional [numeral 3]*”. Restricción que debe entenderse orientada a los profesionales que desarrollan sus actividades dentro de la estructura estatal –verbigracia, un abogado de la defensa pública penal o un facultativo de un centro de salud público– y que por virtud de cuestiones propias de su labor tienen conocimiento de información personal que es compartida por los ciudadanos bajo garantía de confidencialidad y, por ende, está tutelada por los preceptos relacionados en la literal precedente. La inobservancia de ese deber –tanto en el campo privado como en el público– inclusive es penalmente punible, de conformidad con lo establecido en el artículo 223 del Código Penal.

D. “*La que por disposición expresa de una ley sea considerada como confidencial [numeral 4]*”. Previsión genérica para la cual resulta igualmente atinente lo argumentado antes respecto a los artículos 1, numeral 5, y 21 de la ley reprochada de inconstitucionalidad.

E. “*Los datos sensibles o personales sensibles, que solo podrán ser conocidos por el titular del derecho [numeral 5]*”. En el artículo 9, numeral 2, de la ley impugnada se definen *datos sensibles* como “*Aquellos datos personales que se refieren a las características físicas o morales de las personas o a hechos o circunstancias de su vida privada o actividad, tales como los hábitos personales, el origen racial, el origen étnico, las ideologías y opiniones políticas, las creencias o convicciones religiosas, los estados de salud físicos o psíquicos, preferencia o vida sexual, situación moral y familiar u otras cuestiones íntimas de similar naturaleza*;” en evidente alusión a los elementos que integran el contenido esencial del derecho a la intimidad entronizado en los preceptos nacionales e internacionales ya individualizados.

Por otro lado, en el artículo 23 están enumerados una serie de casos en que a juicio del legislador la información se engloba en el concepto de *información reservada*, que de acuerdo al artículo 9, numeral 7, de la misma ley, “*Es la información pública cuyo acceso se encuentra temporalmente restringido por disposición expresa de una ley, o haya sido clasificada como tal, siguiendo el procedimiento establecido en la presente ley*”; esto es, la restricción es igualmente justificada, pero para cumplir eficazmente su cometido de proteger otros valores constitucionales sólo requiere perdurar un determinado período de tiempo. El planteamiento que se resuelve versa respecto a seis de dichos supuestos, por lo que acto seguido se examina su compatibilidad constitucional:

A. “*La información relacionada con la propiedad intelectual, propiedad industrial, patentes o marcas en poder de las autoridades; se estará a lo dispuesto por los convenios o tratados internacionales ratificados por la República de Guatemala y demás leyes de la materia*” [numeral 3]. En primer lugar es necesario enfatizar que la Ley de Propiedad Industrial (Decreto 57-2000 del Congreso de la República) fue promulgada teniendo como antecedentes el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial y el



Acuerdo de la Organización Mundial del Comercio sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, por lo que debe entenderse que constituye la principal normativa de referencia sobre esa temática; claro está, sin perjuicio de la aplicabilidad de las normas de derecho convencional internacional pertinentes. Por otro lado, vale puntualizar que en este contexto la reserva de publicidad es constitucionalmente legítima en tanto persiga guarecer –durante el tiempo previsto en la ley mencionada– la información recibida por las autoridades competentes que esté aparejada al derecho de inventor [reconocido en los artículos 42 y 63 de la Constitución Política de la República; 27, numeral 2, de la Declaración Universal de Derechos Humanos; y 15, numeral 1, inciso c, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales], la denominada *información no divulgada o datos de prueba* relativos a la aprobación de un nuevo producto farmacéutico o químico agrícola para su comercialización y, en general, aquella que por su naturaleza haya sido entregada por los particulares bajo garantía de confidencialidad; habida cuenta que en ese caso se sitúa amparada por lo dispuesto en los artículos 30 constitucional, 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Es con esa significación y respecto a esas circunstancias que debe ser interpretada la restricción a la publicidad contemplada en la disposición que se examina, a efecto de considerarla acorde con los enunciados constitucionales.

B. “*Cuando la información que se difunda pueda causar un serio perjuicio o daño a las actividades de investigación, preventión o persecución de los delitos, la relacionada a los procesos de inteligencia del Estado o a la impartición de justicia* [numeral 4]”. Caso de restricción temporal que encuentra asidero válido en las nociones de persecución penal de las conductas ilícitas y la aplicación de la ley como intereses superiores de la sociedad, en sintonía con el deber estatal de garantizar la seguridad, la justicia y la paz social, mediante las actividad desplegada por el Ministerio Público y el sistema de administración de justicia; ello, al tenor de los mandatos constitucionales establecidos en los artículos 2º, 203 y 251 de la Carta Magna.

C. “*Los expedientes judiciales en tanto no hayan causado ejecutoria, de conformidad con las leyes especiales* [numeral 5]”. De acuerdo al principio de máxima divulgación, debe tenerse por regla general que las actuaciones judiciales son de acceso público. En el artículo 14, numeral 1, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos se le asocia con la noción de debido proceso: “... *Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la substancialización de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil. La prensa y el público podrán ser excluidos de la totalidad o parte de los juicios por consideraciones de moral, orden público o seguridad nacional en una sociedad democrática, o cuando lo exija el interés de la vida privada de las partes o, en la medida estrictamente necesaria en opinión del tribunal, cuando por circunstancias especiales del asunto la publicidad pudiera perjudicar a los intereses de la justicia, pero toda sentencia en materia penal o contenciosa será pública, excepto en los casos en que el interés de menores de edad exija lo contrario, o en las actuaciones referentes a pleitos matrimoniales o a la tutela de menores.*”; precepto que está reproducido parcialmente en el artículo 8, numeral 5, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, como una de las garantías judiciales del proceso penal. Empero, conviene matizar que, como es lógico, el acceso a la información judicial está igualmente sujeto al régimen de limitaciones



expuesto al inicio del presente apartado considerativo, que tiene raigambre en *intereses preponderantes* de índole pública, como la moral, el orden público, la seguridad nacional y la administración de justicia; o privada, como el respeto a la intimidad. Esto último tiene especial incidencia en la modulación del acceso a la información judicial, como se explica a continuación.

Debe partirse de la premisa de que en este ámbito el principio de transparencia en la gestión pública comporta la posibilidad de vigilancia ciudadana sobre el modo en que los jueces ejercen la potestad jurisdiccional, y no respecto a los asuntos particulares que motivan que los administrados acudan al poder judicial, que forman parte de la esfera de privacidad de éstos. Los procedimientos que se sustancian en esa sede tienen lugar como consecuencia del ejercicio del derecho de petición reconocido en el artículo 28 constitucional y usualmente obedecen a pretensiones que sólo atañen a un número determinado de sujetos. Por ende, en su mayoría, los expedientes que documentan dichos procedimientos, accesibles, eso sí, a quienes son parte legitimada dentro de los mismos, no trascienden a un plano de auténtico interés público sino hasta que los jueces competentes resuelven en definitiva las cuestiones sometidas a su conocimiento, pues es mediante dichas determinaciones –una vez que adquieren la autoridad de cosa juzgada– que los referidos funcionarios generan efectos materiales, oponibles *erga omnes* ante la sociedad, en las relaciones jurídicas de las personas; es decir, es en ese momento en el que queda perfeccionada la intervención del sistema de administración de justicia en cada caso concreto. Tal es la idea plasmada en la disposición que se examina, que guarda congruencia con el artículo 171 de la Ley del Organismo Judicial (Decreto 2-89 del Congreso de la República y sus reformas), en el que está dispuesto que mientras las causas judiciales no hayan causado ejecutoria, los expedientes que las documentan deben estar bajo la escrupulosa custodia de los funcionarios que los tienen a su cargo.

En todo caso, la reserva a la que se alude no resulta aplicable cuando se trate de procesos o procedimientos que entrañen evidente interés público, aún desde su mera tramitación, ya sea por motivos de orden objetivo, atinentes a la materia que se elucida –verbigracia, una inconstitucionalidad de carácter general–; o bien, de índole subjetiva, es decir, relacionadas con la calidad con la que intervienen las partes –tal es el caso de un juicio de responsabilidad de funcionario público–.

Asimismo, también cabe puntualizar en los expediente judiciales confluyen, con las resoluciones de los juzgadores, actos procesales en los que las partes eventualmente vierten información personal cuya publicidad, según las características del caso, inclusive puede ameritar ser restringida de forma indefinida, a fin de preservar el honor y el pudor de las personas [sobre todo en casos de menores, cuestión que se aludirá con mayor detenimiento en la literal E].

Es con esos alcances y en esas condiciones que debe ser interpretada la restricción a la publicidad establecida en la norma que se analiza, a fin de estimársele enmarcada dentro de la constitucionalidad.

En una sociedad es indispensable contar con el contralor de la opinión pública de los actos del poder, y de ello no puede quedar excluida la actividad de los jueces. Pero cabe advertir que las expresiones de los componentes de la sociedad civil deben ser coherentes con los fines del Estado constitucional, con el ánimo de que el ejercicio de esa libertad no resulte contrario al bien público, que tiene derecho adquirido a su seguridad, garantizada por el cumplimiento de las resoluciones judiciales.

Como colofón de este tema vale destacar, acerca de la trascendencia del contralor



ciudadano sobre la justicia, que la transparencia no sólo es importante sino indispensable para la vigilancia de su actividad, aunque la cuestión que preocupa a quienes asuman un compromiso serio y ecuánime con la democracia, que es tanto decir con el desarrollo normal de sus instituciones de justicia, es aquella que haga compatibles los mecanismos sociales externos de control de sus órganos estatales con la ponderación suficiente para descartar la vulgaredad de enjuiciar las decisiones sin examen de su razonabilidad, explicada en el contenido de las resoluciones. Estas fueron las motivaciones que tuvo esta Corte con la emisión del Acuerdo 13-2010, que introduce normas que, más allá de las previstas en la Ley de Acceso a la Información Pública, procuran abrir al público el conocimiento de cuestiones importantes, siempre, desde luego, cuando la reserva no sea obligada por las mismas limitaciones constitucionales ya acotadas.

D. “*La información cuya difusión antes de adoptarse la medida, decisión o resolución de que se trate pueda dañar la estabilidad económica, financiera o monetaria del país, así como aquella que guarde relación con aspectos de vigilancia e inspección por parte de la Superintendencia de Bancos [numeral 6]*”. Previsión que, al igual que en la analizada en la literal B del presente apartado, alude a intereses públicos superiores. En este caso, en conexión con los deberes estatales de orientar y desarrollar la economía nacional; formular y ejecutar la política monetaria, cambiaria y crediticia del país; y velar por la solvencia del sistema bancario; como está preceptuado en los artículos 118, 119, 132 y 133 constitucionales, mediante las funciones asignadas al Ministerio de Economía, la Junta Monetaria y la propia Superintendencia de Bancos.

E. “*La información definida como reservada en la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia [numeral 7]*”. Como grupo vulnerable, los menores que se vean involucrados en procedimientos judiciales –ya sea por amenaza o violación de sus derechos humanos, o bien por estar en conflicto con la ley penal– requieren un trato especial acorde a las implicaciones de su condición etaria, a fin de preservar adecuadamente su dignidad humana; la discreción en el manejo de la información es vital en función de este objetivo. En la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia (Decreto 27-2003 del Congreso de la República y sus reformas) está establecida, como obligación del Estado y de la sociedad, “*velar por la dignidad de los niños, niñas y adolescentes, como individuos y miembros de una familia, poniéndolos a salvo de cualquier tratamiento inhumano, violento, aterrizador, humillante o constrictivo [Artículo 16]*”; y en consonancia con ese mandato general, dentro de los derechos y garantías fundamentales que deben observarse en el proceso de la niñez y adolescencia amenazada o violada en sus derechos humanos, figura la *discreción y reserva de las actuaciones* [Artículo 116, inciso h]; así como dentro de los derechos y garantías fundamentales a atender en el proceso de adolescentes en conflicto con la ley penal, se les reconoce a éstos el derecho a que se les respete su vida privada y la de su familia, siendo prohibido divulgar la identidad de un adolescente sometido a proceso [Artículo 152] y, además está establecido el *principio de confidencialidad*, en los siguientes términos: “*Serán confidenciales los datos sobre los hechos cometidos por adolescentes sometidos a esta Ley. En todo momento, deberá respetarse la identidad y la imagen del adolescente. Los Jueces de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal deberán procurar que la información que brinden, sobre estadísticas judiciales, no contravenga el principio de confidencialidad ni el derecho a la privacidad, consagrados en esta Ley [Artículo 153].*”, lo cual conlleva que en determinados casos la información puede incluso encajar en lo preceptuado en el artículo 22, numeral 4, de la ley imputada de inconstitucionalidad.



Estas previsiones legislativas de orden interno encuentran respaldo en la Convención sobre los Derechos del Niño, que en su artículo 16 replica lo dispuesto en los artículos 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos [derecho a la intimidad], específicamente respecto a los menores, y en su artículo 40 preceptúa que "*1. Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño de quien se alegue que ha infringido las leyes penales o a quien se acuse o declare culpable de haber infringido esas leyes a ser tratado de manera acorde con el fomento de su sentido de la dignidad y el valor (...) en la que se tengan en cuenta la edad del niño (...) 2. Con ese fin, y habida cuenta de las disposiciones pertinentes de los instrumentos internacionales, los Estados Partes garantizarán (...) b) Que a todo niño del que se alegue que ha infringido las leyes penales o a quien se acuse de haber infringido esas leyes se le garantice, por lo menos (...) vii) Que se respetará plenamente su vida privada en todas las fases del procedimiento...*" En su observación general número 10, el Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas puso de relieve los efectos nocivos que puede conllevar para los menores el manejo irresponsable de la información, al asentar: "... *En este contexto, el objetivo es evitar que la publicidad indebida o el proceso de difamación causen daño. No se publicará ninguna información que permita identificar a un niño delincuente, por la estigmatización que ello comporta y su posible efecto en la capacidad del niño para acceder a la educación, el trabajo o la vivienda o conservar su seguridad (...) El juicio público en la justicia de menores sólo debe ser posible en casos muy precisos y previa autorización por escrito del tribunal. Esa decisión deberá poder ser apelada por el niño (...) El derecho a la vida privada (art. 16) exige que todos los profesionales que intervengan en la ejecución de las medidas decididas por el tribunal u otra autoridad competente mantengan confidencial, en todos sus contactos externos, toda la información que pueda permitir identificar al niño (...) que los registros de menores delincuentes serán de carácter estrictamente confidencial y no podrán ser consultados por terceros, excepto por las personas que participen directamente en la investigación y resolución del caso [Párrafos sesenta y cuatro (64) a sesenta y seis (66)]*".

F. "La que sea determinada como reservada por efecto de otra ley [numeral 9]". Previsión genérica para la cual resulta igualmente atinente lo argumentado antes con relación a los artículos 1, numeral 5; 21; y 22, numeral 4, de la ley reprochada de inconstitucionalidad.

Para concluir este apartado deviene pertinente puntualizar que, como es natural, en cada caso concreto la autoridad a cargo de la información, de las previstas en el artículo 6 de la ley impugnada como sujetos obligados, deberá ponderar las circunstancias propias del mismo, teniendo como ineludibles premisas los cánones y alcances antes subrayados; para así determinar con apego a los postulados constitucionales si la información que le está siendo requerida contiene elementos que justifiquen, como excepción al principio de máxima publicidad o divulgación, su confidencialidad o reserva.

---VII---

Por último, Marco Antonio Chávez Tejada denuncia la presunta contravención material de los artículos 10., 20. y 30. de la Constitución Política de la República, provocada, a su juicio, por lo normado en los artículos: 10, numeral 4, en la frase "... *incluyendo salarios que corresponden a cada cargo, honorarios, dietas, bonos, viáticos o cualquier otra remuneración económica que perciban por cualquier concepto..*"; 11, numeral 2, en la frase "... *con sus respectivas remuneraciones de cada una de las*



instituciones mencionadas en el numeral anterior;”; 12, numeral 5, en la frase “... con sus respectivas remuneraciones de cada uno de los tribunales mencionados en el numeral anterior;” y 13, numeral 2, en la frase “... con sus respectivas remuneraciones;”, del cuerpo legal al que se imputa inconstitucionalidad.

En el artículo 10 de este último está preceptuado que existe un mínimo de información que los sujetos obligados deben mantener actualizada y disponible, en todo momento, de acuerdo con sus funciones y a disposición de cualquier interesado, para ser consultada de manera directa o mediante los portales electrónicos de dichos sujetos. Como puede inferirse, lo que el referido postulante cuestiona es que se incluya dentro de esa información pública de oficio, el importe pecuniario que perciben las personas que laboran en las entidades previstas en el artículo 6 ibídem; ya sea como salario, honorarios, dietas, bonificaciones, viáticos o cualquier otro concepto.

Sobre el particular es necesario apuntar que tales cantidades están sujetas al interés público por razón de su origen, que es el erario nacional, formado a partir de la carga tributaria absorbida por los ciudadanos para el sostenimiento financiero del Estado. Como ya se explicó antes, siendo la población la detentadora de la soberanía delegada en el poder público, cuenta con la prerrogativa de acceder a la información administrada por éste en y para el ejercicio de sus funciones –a fin de verificar su eficaz cumplimiento–, incluyendo la manera en la que se invierten los recursos estatales; las remuneraciones de los funcionarios, empleados, servidores y asesores a disposición del sector público constituyen, sin duda, un rubro importante en ese sentido. En esto radica el punto de inflexión que valida el trato normativo diferenciado que atañe a las personas que pertenecen a esa categorización, en cuanto a la publicidad de sus remuneraciones, respecto a aquellas que están adscritas a relaciones de trabajo en la iniciativa privada.

Asimismo, de ello se extrae que no se trata de un dato comprendido dentro del núcleo de intimidad personal protegido constitucionalmente; y dado que tampoco comporta cuestiones de seguridad nacional o intereses públicos superiores, se concluye que ese tipo de información no encuadra dentro de ninguno de los supuestos del régimen de limitaciones legítimas delineado en el apartado considerativo precedente, asociados a los denominados *intereses preponderantes*.

Si bien esta Corte no es indiferente al clima de inseguridad que aqueja a la sociedad guatemalteca en la actualidad, estima que tal situación no es atribuible a la decisión legislativa de garantizar la publicidad de las retribuciones y emolumentos que corresponden a los que prestan sus servicios en los distintos niveles del aparato estatal, que es el objeto directo del examen de constitucionalidad que realiza.

Los anteriores razonamientos guardan coherencia, además, con el tenor de la Ley Modelo Interamericana sobre Acceso a la Información, aprobada por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos en resolución de ocho de junio de dos mil diez, haciendo acopio de la plataforma de estándares de derecho internacional consolidada a la fecha sobre la materia. En el artículo 12 de dicho instrumento se incluye dentro de las *clases de información clave sujetas a disseminación de manera proactiva por una autoridad pública* –expresión que se refleja en el concepto de *información pública de oficio* utilizado en la ley nacional bajo escrutinio– a *las calificaciones y salarios de los altos funcionarios, así como a las escalas salariales, incluyendo todos los componentes y subcomponentes del salario total, correspondientes a todas las categorías de funcionarios y consultores que trabajan en la autoridad pública*.

En suma, este tribunal no advierte inconstitucionalidad en el cuerpo legal



impugnado, con base en las consideraciones apuntadas en el presente pronunciamiento, por lo que así será declarado en el apartado correspondiente; debiéndose imponer a cada uno de los abogados patrocinantes la multa a que se refiere el artículo 148 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, incluyendo al abogado Carlos Enrique Velásquez Calderón, por ser responsable de la juridicidad del planteamiento, juntamente con los restantes abogados auxiliares. En cuanto a la condena en costas, no procede decretarla, por ausencia de sujeto legitimado para su cobro.

LEYES APLICABLES

Artículos aplicables y 268 y 272 inciso a de la Constitución Política de la República de Guatemala; 114, 133, 137, 149, 150, 163 inciso a), 183 y 185 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad; y 31 del Acuerdo 4-89 de la Corte de Constitucionalidad.

POR TANTO

La Corte de Constitucionalidad con base en lo considerado y leyes citadas declara:

I. Sin lugar las acciones de inconstitucionalidad de carácter general: **A) Parcial**, promovida por Carlos Enrique Velásquez Calderón, contra los artículos 1, numerales 1, en la frase “*Garantizar a toda persona interesada, sin discriminación alguna...*”, 2, 3, 5, en la frase “*Establecer, a manera de excepción y de manera limitativa, los supuestos en que se restrinja el acceso a la información pública...*”, y 7, en la frase “... garantizar que toda persona...”; 2, en la frase “... para garantizar a toda persona...”; 4; 5, en la frase “... Es toda persona...”; 8; 9, numeral 3, en la frase “*derecho que tiene toda persona*”; 16, en la frase “*Toda persona...*”; 21, en la frase “... la que por disposición expresa de una ley sea considerada confidencial, la información clasificada como reservada de conformidad con la presente ley y las que de acuerdo a tratados o convenios internacionales ratificados por el Estado de Guatemala tengan cláusula de reserva.”; 22, numerales 1 al 5; 23, numerales 3 al 7 y 9; y 41, último párrafo; de la Ley de Acceso a la Información Pública (Decreto 57-2008 del Congreso de la República). **B) Total**, promovida por Marco Antonio Chávez Tejada, contra el cuerpo legal identificado en la literal anterior. Y **C) Parcial**, promovida también por el postulante identificado en la literal anterior, contra los artículos 10, numeral 4, en la frase “... incluyendo salarios que corresponden a cada cargo, honorarios, dietas, bonos, viáticos o cualquier otra remuneración económica que perciban por cualquier concepto...”; 11, numeral 2, en la frase “... con sus respectivas remuneraciones de cada una de las instituciones mencionadas en el numeral anterior.”; 12, numeral 5, en la frase “... con sus respectivas remuneraciones de cada uno de los tribunales mencionados en el numeral anterior.”; y 13, numeral 2, en la frase “... con sus respectivas remuneraciones.”, de la ley ya citada. **II.** No se hace especial condena en costas, por la razón indicada en la parte considerativa. **III.** Se impone multa de mil quetzales (Q1,000.00) a cada uno de los abogados auxiliares: Carlos Enrique Velásquez Calderón, Ana Fabiola Cuyún González, Sergio José Ortiz Zepeda, Rafael Humberto Paredes Kress, Luz María Espinoza Vega y Daniela Alejandra Godínez López; la que deberán hacer efectiva dentro del plazo de tres días de estar firme este fallo, y que, en caso de incumplimiento, se hará efectiva por la vía legal correspondiente. **IV.** Notifíquese.

ROBERTO MOLINA BARRETO
PRESIDENTE

ALEJANDRO MALDONADO AGUIRRE
MAGISTRADO

MARIO PÉREZ GUERRA
MAGISTRADO



GLADYS CHACÓN CORADO
MAGISTRADA

JUAN FRANCISCO FLORES JUÁREZ
MAGISTRADO

HILARIO RODERICO PINEDA SÁNCHEZ
MAGISTRADO

VINICIO RAFAEL GARCÍA PIMENTEL
MAGISTRADO

MARTÍN RAMÓN GUZMÁN HERNÁNDEZ
SECRETARIO GENERAL

**APELACION DE SENTENCIA EN AMPARO****EXPEDIENTE 1083-2013****CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD:** Guatemala, dos de julio de dos mil trece.

En apelación y con su antecedente, se examina la sentencia de cuatro de marzo de dos mil trece, dictada por la Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones del ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, constituida en Tribunal de Amparo, en la acción constitucional de amparo promovida por Celia Yanira Zea Gobern contra el Gobernador del departamento de Guatemala. La postulante actuó con el patrocinio del abogado Jorge Alberto Gregorio Cruz. Es ponente en el presente caso el Magistrado Vocal I, Roberto Molina Barreto, quien expresa el parecer de este Tribunal.

ANTECEDENTES**I. EL AMPARO**

A) Interposición y autoridad: presentado el seis de noviembre de dos mil doce, en el Centro Administrativo de Gestión Penal y, posteriormente remitido a la Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones del ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente. **B)**

Acto reclamado: resolución de once de octubre de dos mil doce, emitida por el Gobernador del departamento de Guatemala, que declaró improcedente el recurso de revisión promovido por Celia Yanira Zea Gobern derivado de la falta de entrega de la información que requirió. **C) Violaciones que denuncia:** se deduce que es al derecho constitucional de acceder a la información pública. **D) Hechos que motivan el amparo:**

lo expuesto por la postulante se resume: **D.1) Producción del acto reclamado:** **a)** el cinco de septiembre de dos mil doce, presentó escrito dirigido al Ingeniero Luis Alfonso Palma Espinoza, Gobernador del departamento de Guatemala, solicitando información con base en la Ley de Libre Acceso a la Información, para que le fuera proporcionado lo siguiente: **i)** certificación de las actas que faccionó como empleada de esa dependencia del dieciocho de julio de mil novecientos noventa y cuatro a la fecha de su solicitud, contenidas en los libros alternos o flotantes de esa gobernación; **ii)** listados de los sorteos de las promociones comerciales con sorteo y de canje, así como de bingos eventuales realizados del uno de marzo al treinta y uno de agosto de dos mil doce, indicando quien asistió a cada evento realizado en representación del Gobernador Departamental, señalando fecha, lugar, hora y nombre de la entidad que realizó cada evento; **iii)** listado de los representantes de la Gobernación del departamento de Guatemala que supervisó cada una de las doce salas de juegos de bingo y video bingo desde el quince de mayo al treinta y uno de agosto de dos mil doce incluyendo nombres de las salas y dirección, así como el nombre de cada representante legal de estas; y **iv)** Manual de Funciones y Procedimientos de las Gobernaciones Departamentales; todo lo cual, requirió para plantear su defensa en el proceso de despido y formulación de cargos que se le inició; **b)** el diecinueve de septiembre de dos mil doce, se le notificó la resolución de diez de ese mes y año, en la que se le comunicó que lo solicitado se retrasaría diez días más en su entrega; pero, llegado el tres de octubre de ese año, venció el plazo estipulado sin que se cumpliera con la entrega ni se notificara al respecto; **c)** interpuso recurso de revisión de conformidad con lo establecido en la ley de la materia el que fue declarado improcedente en resolución de once de octubre de dos mil doce –acto reclamado–, con base en que no



había vencido el plazo para la entrega de la información solicitada y porque el memorial presentado no indicaba claramente los puntos de su interés. **D.2) Agravios que se reprochan al acto reclamado:** afirma la postulante que: **a)** no se tomó en cuenta la fecha en que planteó su solicitud de información; la resolución en la que se admitió a trámite su requerimiento -indicándose que por lo limitado de la plantilla de personal se ampliaba el plazo de respuesta por diez días más- y que el tres de octubre de dos mil doce, venció el plazo respectivo, por lo que, la impugnación que planteó el diez de octubre de ese año –recurso de revisión-, era procedente, al haber vencido el plazo legal para proporcionarle la información; **b)** no es cierto que no se indicara en su planteamiento recursivo los puntos peticionarios de su interés, pues en el numeral uno literales de la a) a la d) del mismo, se especificó estos en forma clara y en el numeral dos se cumplió con lo relativo a señalar la fecha en que se le notificó o tuvo conocimiento del acto que cuestiona, por lo que, de conformidad con lo establecido en el artículo 57 de la Ley de la Acceso a la Información Pública, el recurso de revisión planteado llenaba los requisitos legales; y si bien, el escrito relacionado lo redactó de forma continua sin apartados, esa decisión la tomó con fundamento en el artículo 3 de esa ley, el cual establece los principios de sencillez y celeridad. **D.3) Pretensión:** solicitó que se le proporcione la información requerida. **E) Uso de recursos:** ninguno. **F) Casos de procedencia:** invocó los contenidos las literales a), d), e), f) y h) del artículo 10 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. **G) Ley violada:** no citó.

II. TRAMITE DEL AMPARO

A) Amparo provisional: no se otorgó. **B) Tercero interesado:** no hubo. **C) Informe circunstanciado:** la autoridad cuestionada informó: **a)** en resolución tres mil ochocientos sesenta y tres – dos mil doce (3863-2012) de diez de septiembre de dos mil doce, se admitió a trámite la solicitud de información pública presentada por Celia Yanira Zea Gobern, el cinco de septiembre de ese año, ampliándose el plazo para dar respuesta por diez días más, notificándose a la requirente el diecinueve de ese mes y año; **b)** se dirigió a las unidades correspondientes las peticiones para aportar la información contenida en sus registros; **c)** el diez de octubre del citado año, la requirente interpuso recurso de revisión; **d)** por la fecha en que se formuló la petición de información, el plazo de los diez días que establece el artículo 42 de la ley de la materia venció el dieciocho de ese mes y año; y al notificarse el diecinueve del mes y año la resolución tres mil ochocientos sesenta y tres – dos mil doce (3863-2012), el plazo ampliado que se indicó, venció el tres de octubre de dos mil doce; sin embargo, según el artículo 44 de la ley relacionada, se establecen otros diez días más para la entrega de la información, los que vencían el diecisiete de octubre de aquel año, por lo que, al interponerse la revisión el diez de octubre del año referido, el plazo citado no había vencido; **e)** el once de octubre de dos mil doce, dictó la resolución cuarenta y cuatro mil trescientos uno – dos mil doce (44301-2012) en la que declaró improcedente el recurso indicado, por no haber vencido el plazo para su promoción, y porque en el escrito no se indicó los puntos peticionarios conforme el numeral 4) del artículo 57 de la Ley de Acceso a la Información Pública. **D) Pruebas:** las diligenciadas en primera instancia. **E) Sentencia de primer grado:** la Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones del ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, constituida en Tribunal de Amparo, **consideró:** "... la autoridad impugnada, al declarar improcedente el recurso de



revisión planteado [por] la recurrente, con el argumento que en la fecha en que se planteó dicho recurso no había vencido el plazo para la entrega de la información solicitada, considerando que con fecha diecinueve de septiembre del año en curso se notificó la prórroga del plazo de diez días, los cuales vencieron el tres de octubre del corriente año, posteriormente conforme el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública, el sujeto obligado cuenta con diez días posteriores al vencimiento del plazo para la respuesta y porque en el memorial presentado no indica los puntos petitorios que le son de su interés, vulneró el derecho al libre acceso a la información pública así como los principios de sencillez y celeridad del procedimiento, tomando en cuenta lo señalado en el artículo 42 y 43 de la Ley de Acceso a la Información Pública los cuales en sus partes conducentes señalan (...) es decir que el tiempo para entrega o respuesta a una solicitud hecha a la Unidad de Información, es de diez días que pueden ser prorrogables por diez días más siempre y cuando se ponga en conocimiento al interesado por lo menos con dos días de antelación al vencimiento y si por el contrario el sujeto obligado no diere respuesta antes del vencimiento (Afirmativa ficta), éste está obligado a entregárselo al interesado en el plazo de diez días sin prórroga alguna y su incumplimiento será causa de responsabilidad penal, tal y como lo establece el artículo 44 de la referida Ley. En vista de lo anterior y tomando en cuenta que a la fecha del planteamiento del recurso de revisión el plazo de prórroga para la entrega de los documentos requeridos ya se encontraba vencido (tres de octubre de dos mil doce) y que el objeto del recurso de revisión es precisamente garantizar que en los actos y resoluciones de los sujetos obligados se respeten las garantías de legalidad y seguridad jurídica además que el artículo 55 de la Ley mencionada regula la procedencia del recurso de revisión cuando: (...) se concluye que sí es procedente el recurso de revisión presentado por la recurrente con el objeto de que se ordene a quien corresponda entregar la documentación requerida de forma inmediata bajo apercibimiento que de no hacerlo se certificará en la vía penal. Lo anterior torna viable el otorgamiento de la protección constitucional solicitada. De las Costas: Este Tribunal estima que la autoridad impugnada actuó con la buena fe que se presume en las actuaciones judiciales y administrativas, razón por la cual, con base en la facultad que establece el artículo 45 de la ley de la materia, se le exonera del pago de las costas procesales." **Y resolvió:** "... I.- Otorga amparo a Celia Yanira Zea Gobern, y se restituye la situación jurídica afectada, dejando sin efecto el auto de fecha once de octubre del año dos mil doce, dictado por la autoridad recurrente, que declaró improcedente el recurso de revisión interpuesto por la postulante por el vencimiento del plazo para entrega de documentos con base en la Ley de Acceso a la Información Pública; II) para los efectos positivos de este fallo, la autoridad impugnada deberá dictar la resolución que en derecho corresponde, de conformidad con lo considerado; III) se comunica a la autoridad cuestionada a dar exacto cumplimiento a lo resuelto dentro del término de tres días contados a partir de que reciba la ejecutoria de este fallo, bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se le impondrá multa de dos mil quetzales (Q 2,000.00), sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales consiguientes; IV) no se hace especial condena en costas...".

III. APELACIÓN



El Gobernador del departamento de Guatemala, autoridad impugnada, apeló, reiterando aspectos indicados en el informe circunstanciado, pronunciándose en relación a que los plazos que determina la ley de la materia suman treinta días lo cual resulta lógico y en armonía con lo establecido en el artículo 28 de la Constitución Política de la República de Guatemala.

IV. ALEGATOS EN EL DÍA DE LA VISTA

A) Celia Yanira Zea Gobern, postulante, reiteró los argumentos vertidos en el memorial de interposición de amparo, agregando que el plazo que se amplió para dar respuesta a su solicitud no fue notificado dentro de los dos días antes del vencimiento del primer plazo de diez días que determina la ley de la materia. Solicitó que se declare improcedente el recurso de apelación y, como consecuencia, se confirme la sentencia venida en grado. **B) El Gobernador del departamento de Guatemala, autoridad impugnada,** reiteró lo expuesto en el informe circunstanciado y el planteamiento del recurso de apelación, señalando que recibió información en relación, a que la postulante en el puesto de encargada de la mesa de promociones comerciales y rifas, realizó cobros indebidos y no trasladó los expedientes de la mesa de liquidación de promociones, determinándose que varias personas ganadoras de sorteos promovidos no pagaron los tributos respectivos, hechos por los cuales está sujeta a investigación en el Ministerio Público, la Fiscalía de Sección contra la Corrupción y de Delitos Administrativos, siendo necesario hacer un frente de lucha contra la corrupción por las instituciones del Estado. Solicitó que se revoque la sentencia emitida, confirmando la improcedencia del recurso de revisión planteado. **C) El Ministerio Público, por medio de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal** manifestó compartir el criterio contenido en la sentencia impugnada, estimando que en atención al espíritu de la ley para hacer efectivo el derecho de acceso a la información pública, la norma que aplica la autoridad impugnada no implica que esta se vea beneficiada con contar con otros diez días más, para la entrega de lo requerido, pues la norma lo que establece es que no pueda ya negar la información, como sucedería al dar respuesta en el tiempo legalmente establecido. Asimismo que en la administración pública deben imperar los principios de celeridad y sencillez en el proceso de entrega de la información. Solicitó que se declare sin lugar el recurso de apelación y se confirme la sentencia de primer grado.

CONSIDERANDO

-I-

De conformidad con la Constitución Política de la República de Guatemala y la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, el amparo tiene como fin esencial proteger a las personas contra las amenazas de violaciones a sus derechos o las restablece en su goce cuando la violación hubiere ocurrido. Procede siempre que las leyes, resoluciones, disposiciones o actos de autoridad lleven implícito amenaza, restricción o violación a los derechos que la Constitución y las leyes garantizan.

-II-

Celia Yanira Zea Gobern acudió en amparo contra el Gobernador del departamento de Guatemala señalando como acto reclamado la resolución de once de octubre de dos mil doce, emitida por éste en la cual se declaró improcedente el recurso de revisión que planteó por la tardanza en la entrega de la documentación que solicitó con base en lo



establecido en la Ley de Acceso a la Información Pública. La autoridad impugnada, hizo la declaratoria indicada estimando que el recurso de revisión se había planteado antes de que venciera el plazo para entregar la documentación requerida, con base en lo establecido en el artículo 44 de la ley *ibidem*.

La Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones del ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, constituida en Tribunal de Amparo, al dictar la sentencia de primer grado, otorgó la protección constitucional, interpretando que el plazo para la entrega de la información requerida era de diez días, el cual podía ampliarse a diez días más, informándolo como mínimo dos días antes del vencimiento al requirente, por lo que, a la fecha del planteamiento de la revisión el plazo de prórroga para la entrega de los documentos requeridos ya se encontraba vencido.

-III-

Esta Corte para una mejor comprensión del caso estima pertinente hacer la trascipción de lo conducente establecido en los artículos de la Ley de Acceso a la Información Pública que resultan aplicables: "**ARTICULO 33. Acceso a los datos personales.** (...) información debe ser entregada por el sujeto obligado, dentro de los diez días hábiles siguientes contados a partir de la presentación de la solicitud..." "**ARTICULO 42. Tiempo de respuesta.** Presentada y admitida la solicitud, la Unidad de Información donde se presentó, debe emitir resolución dentro de los diez días siguientes..." "**ARTICULO 43. Prórroga del tiempo de respuesta.** Cuando el volumen y extensión de la respuesta así lo justifique, el plazo de respuesta a que se refiere la presente ley se podrá ampliar hasta por diez días más, debiendo poner en conocimiento del interesado dentro de los dos días anteriores a la conclusión del plazo señalado en esta ley." "**ARTICULO 44. Afirmativa ficta.** Cuando el sujeto obligado no diere respuesta alguna en el plazo y forma que está obligado, éste quedará obligado a otorgarla al interesado en un periodo no mayor de diez días posteriores al vencimiento del plazo para la respuesta, sin costo alguno y sin que medie solicitud de parte interesada. El incumplimiento de lo previsto en este artículo será causal de responsabilidad penal.". Interpretándose de la normativa citada, que existe un plazo para la entrega de la información que se solicite cumpliendo lo establecido en la ley de la materia, el cual es de diez días que inicia a partir de la recepción de la solicitud correspondiente y su respectiva admisión, debiendo estar última ser inmediata; este plazo puede ser ampliado cuando las circunstancias del caso lo justifiquen, por otros diez días más, pero debe informarse al requirente sobre la ampliación como mínimo dos días antes de que venza el plazo normal.

En el supuesto de que dentro del plazo normal o el ampliado, no se haya cumplido con alguna de las opciones que esa ley determina en el artículo 42, como lo son: **i)** entregar la información solicitada; **ii)** notificar la negativa en cuanto a entregar la información si el interesado en el término que se conceda, no aclara lo que se le solicitó o subsana omisiones; **iii)** notificar la negativa en cuanto a entregar la información total o parcialmente, por considerarse que esta es reservada o confidencial; o **iv)** indicando su inexistencia; la persona obligada debe otorgar la información solicitada dentro de un plazo que no puede exceder otros diez días, siendo el incumplimiento de ello causal de responsabilidad penal.



En ese sentido resulta errónea la interpretación que hizo la autoridad cuestionada en cuanto a que al no haber dado ninguna de las respuestas indicadas dentro del plazo normal o el ampliado, aún tenía el plazo de diez días para otorgar la información y que por ello, el recurso de revisión había sido interpuesto antes de tiempo. Lo anterior porque, el último plazo indicado, ya no es para dar respuesta a la solicitud, sino para otorgar la información y a ese respecto el artículo 55 numeral 4) de la Ley de Acceso a la Información Pública, es claro en cuanto a estipular como caso de procedencia de la revisión, la falta de respuesta refiriéndose a lo requerido dentro de los términos estipulados –normal o su ampliación–. Por lo anterior, la declaratoria de improcedencia de la impugnación promovida, resulta agravante y, habiéndose resuelto en ese sentido, hace pertinente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primer grado, y como consecuencia, confirmar el otorgamiento de la protección constitucional solicitada.

Oportuno resulta indicar, que es desacertado que por el hecho de que exista discrepancia en cuanto a la improcedencia o no del recurso de revisión promovido, se paralice lo referente a la entrega de la información motivo de requerimiento, según se deduce de la petición que en su oportunidad realizó la postulante pidiendo la ejecución de lo dispuesto en la sentencia de primer grado como consta a folio noventa y tres (93) de la pieza de amparo, puesto que, no existe motivo legal que impida la continuación del procedimiento en cuanto a la entrega de la documentación solicitada, por ello, el proceder omisivo indicado conlleva el incumplimiento de los fines de la Ley de Acceso a la Información Pública y vulnera también, el derecho de acceso a la información, al indebidamente dejar en un impasse la entrega, en espera de lo que se resuelva en el recurso indicado, razón por la cual resulta pertinente hacer la presente acotación a efecto de aleccionar a todos sujeto obligado por la ley referida para que se evite ese tipo de práctica u omisión.

LEYES APPLICABLES

Artículos citados, 265, 268 y 272, inciso c), de la Constitución Política de la República de Guatemala; 1º., 2º., 3º., 4º., 5º., 6º., 7º., 8º., 10., 42., 45., 56., 57., 60., 61., 63., 64., 66., 67., 163 inciso c), 185 y 186 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad; 17 y 34 bis del Acuerdo 4-89 de la Corte de Constitucionalidad.

POR TANTO

La Corte de Constitucionalidad, con base en lo considerado y leyes citadas, al resolver declara: **I) Sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por el Gobernador del departamento de Guatemala, Luis Alfonso Palma Espinoza –autoridad impugnada-. **II) Se confirma la** sentencia apelada, por las razones consideradas anteriormente. **III)** Notifíquese y, con certificación de lo resuelto, devuélvanse los antecedentes.

HÉCTOR HUGO PÉREZ AGUILERA
PRESIDENTE

ROBERTO MOLINA BARRETO
MAGISTRADO

ALEJANDRO MALDONADO AGUIRRE

GLORIA PATRICIA PORRAS ESCOBAR
MAGISTRADA

MAURO RODERICO CHACÓN CORADO



MAGISTRADA

MAGISTRADO

MARTÍN RAMÓN GUZMÁN HERNÁNDEZ
SECRETARIO GENERAL

La presente edición se terminó de imprimir en el taller de publicaciones
de la institución del Procurador de los Derechos Humanos